

Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?

Public Expenditure Preferences in Spain: Self-interest or Values?

Ruth Cicuéndez Santamaría

Palabras clave

Gasto público
 • Interés propio
 • Opinión pública
 • Políticas públicas
 • Predisposiciones simbólicas

Key words

Public Spending
 • Self-Interest
 • Public Opinion
 • Public Policies
 • Symbolic
 Predispositions

Resumen

En este artículo se analizan algunos de los factores que condicionan las preferencias de gasto público de los ciudadanos en España, centrándose en el papel que juegan las motivaciones económicas de los individuos, su ideología y sus valores. Para abordar estas cuestiones, se han aplicado dos teorías: la del interés propio y la de las predisposiciones simbólicas. El análisis empírico demuestra que tanto las características sociodemográficas y económicas como la ideología y las creencias de los ciudadanos influyen en la articulación de las demandas específicas de gasto público. Además, se identifica cuáles son los mejores predictores de las preferencias en cada programa de gasto, concluyendo que el impacto del interés propio y de las predisposiciones simbólicas varía significativamente en función de la naturaleza de las diferentes políticas públicas.

Abstract

This article analyses the factors that condition the public expenditure preferences of citizens in Spain. It focuses on the role that individuals' economic motivations, ideology and values play in forming these preferences. Two theories were selected for this purpose: self-interest theory and symbolic predispositions. An empirical analysis showed that demographic and economic characteristics such as citizens' ideology and values influence how specific demands for public spending are articulated. In addition, the best predictors of the preferences in each public spending programmes are identified. The conclusion is that the impact of self-interest and symbolic predispositions varies significantly depending on the nature of the different public policies.

Cómo citar

Cicuéndez Santamaría, Ruth (2017). «Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 160: 19-38. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.160.19>)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Ruth Cicuéndez Santamaría: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid | ruth.cicueendez@urjc.es

INTRODUCCIÓN

El análisis de las preferencias ciudadanas de gasto público se ha basado durante mucho tiempo en las doctrinas económicas, especialmente en la teoría de la elección racional, centrándose en el efecto de las motivaciones económicas sobre las demandas sociales. Sin embargo, la sociología y la ciencia política dieron un paso más al introducir en el análisis la ideología y los valores como posibles condicionantes de las actitudes sociopolíticas.

El propósito de este trabajo es avanzar en el estudio del poliédrico proceso de formación de las preferencias colectivas de gasto público. Con esta finalidad, se han aplicado dos teorías, tradicionalmente antagónicas pero que aquí se consideran complementarias, para interpretar las actitudes: el interés propio y las predisposiciones simbólicas¹. Se pretende comprobar si los españoles apoyan prioritariamente aquel gasto público que se destina a las políticas que maximizan sus beneficios personales, o si el nivel de apoyo depende preminentemente de los posicionamientos ideológicos.

La investigación empírica de los factores que inciden en la formación de las preferencias de gasto público es compleja, y no parece posible identificar una única tipología de variables que permita explicar este proceso en todas las políticas públicas (Monroe, 1979; Jacoby, 1994; Carrillo y Tamayo, 2011). No obstante, gran parte de la literatura académica sostiene que las características sociodemográficas —como expresión de los intereses individuales—, junto con las variables ideológicas, son los principales determinantes de las actitudes hacia el gasto (Sears *et al.*, 1980; Lewis, 1983; Mouritzen, 1987; Jæger, 2006).

En línea con este planteamiento, a lo largo del artículo se intenta responder a dos preguntas: ¿qué variables resultan mejores predictores de la formación de preferencias

de gasto de los españoles a lo largo del tiempo, el interés propio o las predisposiciones simbólicas? ¿El impacto de ambos tipos de condicionantes varía de una política pública a otra? Para ello se mide la correlación entre determinadas características sociodemográficas e ideológicas y la demanda de gasto en diferentes programas.

Lo novedoso de esta investigación es que su diseño metodológico combina el análisis longitudinal, para observar la evolución del efecto de estos factores, con el análisis sectorial por políticas públicas, para identificar qué variables ejercen mayor influencia sobre las preferencias en cada área.

Inicialmente, se exponen las teorías en las que se basa el estudio empírico. A continuación se describe la metodología, los datos y variables utilizadas, y se formulan las hipótesis de investigación. Después, se presentan los resultados y, finalmente, se discuten los hallazgos y limitaciones del trabajo.

MARCO ANALÍTICO: INTERÉS PROPIO Y VALORES

El marco analítico en el que se fundamenta esta investigación considera dos teorías recurrentes en el estudio de la opinión pública. La primera es la «tesis del interés propio», la cual sugiere que las preferencias individuales sobre las políticas públicas se conforman a partir de una evaluación racional de los beneficios y los costes asociados a cada programa (Citrin, 1979: 122). La segunda, denominada «perspectiva de las predisposiciones simbólicas», plantea que las actitudes sociales dependen básicamente de la ideología y los valores internalizados por cada persona durante el proceso de socialización (Eis-meier, 1982; Henderson *et al.*, 1995).

Las motivaciones económicas del individuo: la teoría del interés propio

Resulta preceptivo ofrecer una definición de «interés propio». Sears y Funk (1991: 16) per-

¹ En inglés, «the symbolic politics perspective».

filan un concepto operativo en los siguientes términos: «particular postura actitudinal adoptada en función de (1) el impacto a corto y medio plazo (2) en el bienestar material (3) de la vida personal del individuo (o de su familia cercana)». A tenor de este concepto, el interés se entiende en su acepción económica más individualista, esto es, cuanto más interesada está una persona en determinados programas públicos, más propensa será a desarrollar actitudes positivas hacia los mismos, y a favorecer el incremento del gasto destinado a financiarlos. Esto implica que los ciudadanos tienden a hacer elecciones, políticas o de otro tipo, que puedan aumentar su riqueza, poder o prestigio (Citrin y Green, 1990) o, en el caso de las políticas públicas, elecciones que contribuyan a mejorar su seguridad material.

Fue Birdsall (1965: 238 y ss.) uno de los primeros economistas en considerar que el individuo es, ante todo, un «maximizador de utilidades personales», que intentará elevar al «máximo» su bienestar. Su modelo asume que la demanda privada de gasto se basa en un análisis racional de costes y beneficios de cada programa, y que esta puede explicarse recurriendo a las variables utilizadas en la teoría económica del consumo de bienes: características sociodemográficas, renta, bienes públicos consumidos, etc. (Birdsall, 1965: 283-284).

Utilizando este modelo, estudios sociológicos y politológicos² han aplicado la hipótesis del interés propio para explicar cómo se produce la demanda de gasto público, presuponiendo que «el hombre es egoísta, racional y maximizador de utilidades» (Citrin y Green, 1990: 1). En la misma línea, Sears y Funk (1991: 4) afirman que tres tendencias básicas determinan la formación de las actitudes sociopolíticas: la racionalidad, el ma-

terialismo y el egoísmo; y el interés propio sería una conjunción de las tres.

La tesis básica del autointerés, adaptada al tema investigado, plantea que aquellos ciudadanos que necesiten, actualmente o en el futuro, para sí o para sus familias, determinadas prestaciones públicas serán más partidarios de incrementar los recursos asignados a esas políticas, de acuerdo con la hipótesis de los «underdogs» (Hasenfeld y Rafferty, 1989: 1030).

La verificación empírica de esta popular teoría resulta compleja, obteniéndose resultados dispares en su aplicación. Algunos estudios respaldan dicha tesis, concluyendo que predominan las actitudes utilitaristas y egoístas en las personas (Kristensen, 1982). Otros demostraron que los ciudadanos se mueven, principalmente, por el interés público o altruismo (Kinder y Kiewiet, 1981; Lewin, 1991). Un tercer grupo de publicaciones confirmaron que tanto los comportamientos egoístas como los motivos altruistas son determinantes (Ferris, 1983; Mouritzen, 1987; Funk, 2000). Sea como fuere, una amplia evidencia estadística confirma que las motivaciones económicas no explican *per se* las preferencias de gasto público (Sears y Funk, 1991; Andreß y Heinen, 2001; Linos y West, 2003; Lau y Heldman, 2009), argumentándose incluso que la ideología es un moderador del impacto de los intereses materiales en la configuración de las preferencias (Eismeier, 1982: 136).

El papel de las predisposiciones simbólicas en la formación de preferencias

El auge de las doctrinas económicas contribuyó a relegar las investigaciones focalizadas en el efecto de los valores sobre las actitudes sociales. Pero, desde los años setenta, muchos de los trabajos sobre este tema probaron que, si bien el apoyo al gasto público es una función del interés propio, había una influencia significativa de otras variables, como la ideología y la afiliación a un

² Véanse Sears *et al.* (1980), Feldman (1982), Ferris (1983), Taylor-Gooby (1983), Lewin (1991), Jacoby (1994), Tamayo y Carrillo (2011), entre otros muchos.

partido político. Algunas investigaciones sostenían que el autointerés no es el factor determinante en las demandas de gasto, sino el autopoicionamiento ideológico del ciudadano (Schokkaert, 1987: 182), de forma que sus preferencias deben ser interpretadas en términos de orientación ideológica y filiación política, más que en términos utilitaristas (Lewis, 1983: 161).

De acuerdo con la perspectiva «the symbolic politics», las actitudes concretas hacia las políticas públicas se basarían en la relación simbólica que establece cada persona entre estas políticas y sus valores, interiorizados desde una edad temprana y a largo plazo (Sears *et al.*, 1980: 683). A partir de esta tesis, se identifican cuatro planteamientos relevantes. Primero, las preferencias del individuo son resultado de su socialización durante la infancia, es decir, son respuestas emocionales —*predisposiciones simbólicas*— aprendidas mediante experiencias tempranas de formación (Citrin y Green, 1990: 4). Segundo, las opiniones están determinadas prioritariamente por los valores adquiridos durante esa etapa de socialización y estos encuentran acomodo en una ideología que, por añadidura, condicionará las preferencias (Sears y Funk, 1990: 72-75). Tercero, algunas actitudes sociopolíticas se habrán desarrollado sin que la persona haya hecho evaluación alguna de sus necesidades (Sears *et al.*, 1980: 671). Cuarto, el nivel de apoyo individual al gasto en cada programa correlacionará con su sistema general de orientaciones políticas y creencias ideológicas (Hasenfeld y Rafferty, 1989: 1042).

En conclusión, en el proceso de evaluación se activan en el sujeto una serie de predisposiciones simbólicas subyacentes que actúan a la hora de formalizar sus actitudes y demandas, también en materia de gasto público (Jacoby, 1994). Pero la influencia del posicionamiento ideológico será diferente en cada política, porque tienen características, destinatarios e impactos distintos (Rudolph y Evans, 2005: 662).

Interés propio y predisposiciones simbólicas: uniendo teorías

La literatura internacional sobre opinión pública y Estado de bienestar incorporó como línea de investigación, a partir de los años ochenta, el estudio de los condicionantes de las actitudes hacia el bienestar. Estos trabajos han proporcionado abundante evidencia empírica para probar que los factores ideológicos y el interés propio son los principales predictores de las actitudes hacia el Estado de bienestar en sus diferentes dimensiones (Taylor-Gooby, 1983; Hasenfeld y Rafferty, 1989; Sears y Funk, 1991; Lau y Heldman, 2009). Estos mismos resultados se obtienen en los estudios comparados (Andreß y Heinen, 2001; Blekesaune y Quadagno, 2003; Linos y West, 2003; Jæger, 2006).

Asimismo, investigaciones especializadas en el estudio de las actitudes hacia el gasto han demostrado que, tanto los atributos individuales que expresan el interés propio, como la ideología y las creencias, son los determinantes primordiales que interactúan en el proceso de formación de preferencias (Citrin, 1979; Sanders, 1988; Jacoby, 1994; Rudolph y Evans, 2005). Sobre lo que no hay acuerdo, es si muestra mayor capacidad predictiva el interés propio o las predisposiciones simbólicas (Sears *et al.*, 1980).

Las distintas publicaciones sobre la materia sí coinciden en que las preferencias ciudadanas y sus determinantes varían notablemente en función del sector de política pública (Eismeier, 1982; Rudolph y Evans, 2005), aunque suelen analizar un reducido número de políticas. Incluso si fuera posible identificar una batería de variables que incidan de forma sistemática en las actitudes hacia un área específica, como según Jacoby (1994) sucede en los programas de bienestar, el grado de influencia de cada variable en la formación de preferencias difiere de una política a otra (Monroe, 1979; Sanders, 1988).

En el actual contexto de crisis financiera internacional, la ciudadanía ha modificado

sus demandas de gasto público, otorgando prioridad al incremento de los recursos en los programas de bienestar y promoción del crecimiento económico, frente a otras políticas como medio ambiente o cultura (Diamond y Lodge, 2013: 7), por lo que resulta lógico presuponer que se impondrán los intereses materiales sobre los valores. Diamond y Lodge (2013) estudian la situación en Europa y Brooks y Manza (2013) en Estados Unidos, concluyendo que durante la recesión los ciudadanos apoyan aquellas políticas de gasto en las que tienen un interés directo, especialmente las que conciernen a su bienestar material. También puede ocurrir que en este momento de incertidumbre muchos ciudadanos perciban que resulta imperioso defender el Estado de bienestar y sus valores esenciales, polarizándose las opiniones (Forma, 1999). Además, el impacto de la crisis es desigual, y puede incrementarse el apoyo al gasto en políticas sociales por parte de los más afectados, manteniéndose invariables las preferencias del resto de la población (Margalit, 2013).

En España, acreditados trabajos han descrito las actitudes en materia de gasto público, y en algunos casos se ha investigado sobre las preferencias y sus determinantes (del Pino, 2005; Arriba *et al.*, 2006; del Pino *et al.*, 2011; Carrillo y Tamayo, 2011; Calzada y del Pino, 2013). Se ha constatado que los españoles manifiestan un claro apoyo al aumento continuado de los recursos en casi todas las áreas de política, principalmente en los programas de bienestar (del Pino *et al.*, 2011: 39-42) y que, con oscilaciones, esa tendencia se ha mantenido durante la crisis (Calzada y del Pino, 2013: 179-181). Al mismo tiempo, se ha verificado que determinadas características sociodemográficas, junto con la ideología, son los principales factores explicativos de sus demandas de gasto, al menos en las políticas sociales (Arriba *et al.*, 2006: 78-80). Con todo, en nuestro país el impacto del interés propio y de los valores es limitado y varía perceptible-

mente de una política a otra (Carrillo y Tamayo, 2011: 215-216).

En definitiva, las preferencias son contingentes y están condicionadas por múltiples variables, pero falta por responder: ¿cuáles son los mejores predictores en cada política pública?

METODOLOGÍA: DATOS, VARIABLES E HIPÓTESIS

Con la finalidad de aplicar las teorías descritas al caso español, se han recopilado los datos demoscópicos procedentes de la encuesta anual «Opinión Pública y Política Fiscal», del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de veintisiete estudios cuantitativos de ámbito nacional, con una muestra que oscila entre los 2.400 y 2.500 entrevistados, realizados entre 1985 y 2015³. En el cuadro 1 se describen las variables de análisis, construidas aprovechando preguntas incluidas en los estudios.

La variable dependiente —preferencias individuales de gasto en cada política pública— se elabora utilizando una pregunta relativa a la intensidad de la demanda de gasto en doce programas distintos. Como variables independientes se seleccionan aquellas previamente testadas en diversos trabajos sobre la materia, diferenciando entre las referidas al interés propio y las referidas a valores e ideología.

En consonancia con la teoría del autointerés, se plantea inicialmente la siguiente hipótesis: *las personas con bajos ingresos, de clase social baja, con menor nivel de forma-*

³ En la investigación se han analizado año a año los datos del período comprendido entre 1985 y 2015. Por la extensión del artículo, solo figuran los datos correspondientes a fechas seleccionadas. Asimismo, se han realizado análisis para evidenciar si existía correlación entre la demanda de gasto en algunas políticas y el hecho de ser usuario o beneficiario de esas prestaciones. Para obtener información detallada, contacte con la autora.

CUADRO 1. Descripción de las variables e indicadores

Variables	Preguntas tomadas como indicador	Valores de la variable
Variable dependiente		
Preferencias de gasto en cada política pública	Las administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar servicios públicos y prestaciones. Dígame si cree que dedican demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que mencione	1=Demasiados 2=Los justos 3=Muy pocos
Variables de interés propio		
Tamaño del hábitat	Tamaño del municipio de residencia del entrevistado	1=Menos o igual a 2.000 hab. 2=2.001 a 10.000 hab. 3=10.001 a 50.000 hab. 4=50.001 a 100.000 hab. 5=100.001 a 400.000 hab. 6=400.001 a 1.000.000 hab. 7=Más de 1.000.000 hab.
Sexo	Sexo de la persona entrevistada	1=Hombre 2=Mujer
Edad	¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?	Edad del entrevistado en años (18 a 99 años)
Nivel de estudios	¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha cursado?	1=Sin estudios 2=Primaria 3=Secundaria 4=Formación Profesional 5=Estudios Superiores 6=Estudios de Postgrado
Estatus socioeconómico	Estatus socioeconómico de la persona entrevistada	1=Clase alta/media-alta 2=Nuevas clases medias 3=Viejas clases medias 4=Obreros/as cualificados/as 5=Obreros/as no cualificados/as
Ingresos del hogar	¿De cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos?	Escala en euros dividida en 11 tramos, que van desde «1=ningún tipo de ingresos» a «11= más de 6.000 euros anuales»
Variables ideológicas y valores		
Religiosidad	¿Cómo se define en materia religiosa?	1=Católico/a 2=Creyente de otra religión 3=No creyente 4=Ateo/a
Práctica de la religión	¿Con qué frecuencia asiste a misa u otros oficios religiosos?	1=Casi nunca 2=Varias veces al año 3=Alguna vez al mes 4=Casi todos los domingos/festivos 5=Varias veces a la semana
Autoubicación ideológica	Al hablar de política se utilizan las expresiones izquierda y derecha. En estas casillas que van de izquierda a derecha, ¿en qué casilla se colocaría?	Escala de 1 a 10, donde 1 equivale a extrema izquierda y 10 a extrema derecha
Identificación con un partido político	En las últimas elecciones generales, ¿podría decirme a qué partido o coalición votó?	Listado de partidos políticos que se presentan a las elecciones. Respuestas precodificadas.

ción, los jóvenes y los ancianos, los usuarios habituales de los servicios públicos y los beneficiarios de las políticas de transferencias, la gente con alto riesgo de sufrir pobreza o desempleo y los residentes en municipios de tamaño medio y grande mostrarán mayor apoyo al gasto público dedicado a financiar las principales políticas. Para probar esta hipótesis, se escogen determinadas variables, cuyos mecanismos causales se explican a continuación.

El nivel de ingresos y la clase social son, según la literatura especializada, excelentes indicadores del interés propio (Sanders, 1988; Himmelstein y McRae, 1988). Las personas con menor nivel de ingresos y de bajo estatus socioeconómico, claramente favorecidas por el intercambio impuestos-prestaciones, están más interesadas en que se destinen cuantiosos recursos a los principales programas de gasto que los grupos pertenecientes a la clase alta y con elevados ingresos, los cuales soportan la carga fiscal aunque sea improbable que utilicen tales prestaciones (Svallfors, 2003).

Por otra parte, el grado de formación puede tener efectos tanto positivos como negativos sobre el apoyo al gasto público (Erikson *et al.*, 1989). Los ciudadanos con mayor formación se incorporan más fácilmente al mercado de trabajo, acceden a puestos bien remunerados y sufren menor riesgo de desempleo, por lo que no perciben la necesidad de apoyar las políticas de renta y de redistribución. Sin embargo, es probable que la educación promueva la socialización en valores igualitarios, generando actitudes favorables hacia el gasto en programas de bienestar (Andreß y Heinen, 2001). La mayoría de las investigaciones indican que existe una relación negativa entre formación y apoyo al gasto público en los Estados de bienestar (Linos y West, 2003; Jæger, 2006), pero otras determinan que se produce una correlación positiva (Sears y Funk, 1991).

Otras variables sociodemográficas, invariablemente relacionadas con las preferencias, son sexo y edad. En general, las mujeres y los jóvenes se muestran más favorables al gasto público, especialmente en programas sociales (Sanders, 1988; Carrillo y Tamayo, 2011). Las mujeres demandan en mayor medida que los hombres el incremento de los recursos públicos debido a su posición más vulnerable en el mercado de trabajo y al papel que tradicionalmente han asumido en el cuidado de la familia (Svallfors, 2003). Asimismo, se espera que la juventud apoye mayoritariamente las políticas sociales porque las cohortes jóvenes han disfrutado de elevados niveles de bienestar material, más que las generaciones anteriores, y tienen valores más igualitarios (Inglehart, 1998). Y es lógico suponer que los jóvenes se vean como posibles beneficiarios de los programas para infancia y familia, de las prestaciones por desempleo o de los servicios culturales, mientras que los ancianos podrán utilizar los servicios sociales, las pensiones para la tercera edad o la sanidad. Consecuentemente, estos grupos demográficos serán más favorables al gasto que los adultos de mediana edad (Blekesaune y Quadagno, 2003).

Igualmente, el tamaño del hábitat, indicador del contexto social, condicionará las actitudes, pues los habitantes de municipios más pequeños perciben que deben sufragar numerosas prestaciones a las que tienen difícil acceso por su lugar de residencia (Carrillo y Tamayo, 2011).

Las variables seleccionadas para medir el efecto de valores e ideología son: religiosidad, práctica semanal de la religión, auto-ubicación ideológica e identificación con un partido político. Se propone la subsiguiente hipótesis básica: *las personas de ideología de izquierdas, y/o que votan a partidos de izquierda o centro-izquierda, demandan el aumento del gasto público en mayor medida que las personas de ideología de derechas, y/o que votan a partidos de derecha.* Al mismo tiempo, la religiosidad afectará a las opi-

niones sobre el papel del mercado y del Estado, sobre la solidaridad y la atención a grupos vulnerables.

La asociación entre ideología y preferencias de gasto está bien documentada. Los individuos con ideología de izquierda o que votan a partidos de izquierda son más propensos a apoyar las diferentes políticas públicas, principalmente del área de bienestar (Jacoby, 1991; Shivo y Uusitalo, 1995; Rudolph y Evans, 2005; Arriba *et al.*, 2006). Parece razonable considerar que estos ciudadanos, especialmente proclives a incrementar la intervención pública y afines ideológicamente con el Estado de bienestar, se mostrarán más partidarios de incrementar el gasto social, para asegurar los niveles de calidad de vida que el sistema de bienestar salvaguarda (Lau y Heldman, 2009).

Para evaluar el efecto del interés propio y de las predisposiciones simbólicas sobre las preferencias de gasto se han calculado correlaciones bivariadas entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes, aplicando distintos coeficientes en función de si la variable explicativa era ordinal (ro de Spearman), nominal (coeficiente de contingencia) o de intervalo (r de Pearson), y también se han elaborado tablas de contingencia.

En función de los comportamientos previstos por las teorías del marco analítico, se formulan las siguientes hipótesis concretas de trabajo:

H₁: Las preferencias de los ciudadanos hacia los programas de gasto público dependen de sus intereses individuales, de forma que apoyarán el gasto destinado a aquellos programas que les benefician en la actualidad, o puedan beneficiarles en un futuro, a ellos o a su familia.

H₂: Las preferencias en materia de gasto público dependen esencialmente de la orientación ideológica y de los valores del individuo.

H₃: El impacto, tanto del interés propio como de las predisposiciones simbólicas,

varía de una política a otra; en las políticas económicas y de transferencias de renta tienen mayor influencia los intereses individuales en la formación de preferencias, mientras que en las políticas de soberanía y en las políticas postmaterialistas es mayor el efecto de los valores y la ideología.

H₄: En las etapas de crisis económica prolongada aumenta la influencia del interés propio en la formación de preferencias de gasto público.

RESULTADOS: LOS CONDICIONANTES DE LAS PREFERENCIAS DE GASTO

Los resultados del análisis estadístico sobre el efecto del interés propio y de los valores como predictores de las preferencias de gasto público de los españoles se recogen en la tabla 1.

El primer hallazgo relevante es que, como predice la teoría, los intereses de los individuos influyen en sus preferencias de gasto público, de forma moderada aunque no intrascendente. El autointerés tiene un efecto estadístico limitado sobre las actitudes hacia el gasto en la mayoría de políticas, incluso en aquellos programas directamente relacionados con cuestiones materiales que afectarían a las «utilidades» de los ciudadanos y/o sus familias.

El segundo hallazgo es que la variable que ejerce mayor influencia es el nivel de ingresos del hogar⁴, si bien solo se dispone de datos sobre este indicador desde 2010. Los ingresos familiares correlacionan negativamente con las preferencias de gasto en casi todos los programas, siendo esta asociación más intensa en las políticas de seguridad social y protección al desempleo, lo que encaja con la tesis del interés propio. Otras varia-

⁴ También se incluyeron en el análisis las variables «situación económica personal» —correlaciona estadísticamente con la demanda de gasto en la mayoría de políticas públicas— y «situación laboral».

bles estadísticamente significativas son el nivel de estudios, que afecta a las demandas de gasto en la mayoría de áreas, así como el tamaño del hábitat y la edad, que solo actúan sobre la demanda en determinados programas.

En cuanto al efecto de las predisposiciones simbólicas, hay que señalar, primero, que la ideología condiciona las preferencias en casi todas las políticas públicas, pero su influencia no es muy intensa ni constante. Durante el período considerado, las cuestiones ideológicas inciden, con oscilaciones, sobre la demanda de recursos en diez de los doce programas. Segundo, la identificación con un partido político es mejor predictor de las preferencias que la autoubicación ideológica. Tercero, como se pronosticaba, los ciudadanos que se ubican a la izquierda y/o votan a partidos de izquierda son más favorables al aumento del gasto, salvo en defensa y seguridad ciudadana. Por último, la religiosidad es un factor condicionante en la mayoría de programas.

Con todo, resulta más relevante el examen por políticas públicas, para identificar tendencias significativas.

Las políticas de soberanía

El factor que más influye en las actitudes hacia el gasto en *defensa*, aparte del nivel de ingresos, es la formación, siendo las personas con menos estudios más favorables a aumentar esta partida. En *seguridad ciudadana*, las demandas de recursos también correlacionan negativamente con el nivel de estudios, y positivamente con la edad. En este caso, el sexo se ha convertido en una variable explicativa, las mujeres están actualmente más preocupadas que los hombres por la intervención en orden público.

Llama la atención que defensa y seguridad ciudadana son las únicas materias en que la asociación entre autoubicación ideológica y demanda de recursos, además de ser algo más intensa, es de signo negativo:

los entrevistados con opiniones más positivas son los situados a la derecha del espectro político. Además, el respaldo al gasto militar es mayor entre los electores del PP y de CiU, reduciéndose entre los votantes de IU, mientras que los del PSOE ocupan una posición intermedia. Pese a estas correlaciones, en seguridad ciudadana el peso de las cuestiones ideológicas es cada vez menor, especialmente desde el inicio de la crisis.

En cuanto a los valores, las personas creyentes y que practican la religión apoyan en mayor medida el presupuesto para programas militares y de orden público. Precisar que, salvo las personas más religiosas y quienes se autoubican a la derecha, la opinión pública rechaza mayoritariamente el aumento de los recursos destinados a defensa. En definitiva, las preferencias de gasto en defensa están más determinadas por las predisposiciones simbólicas que por el interés propio. Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana van adquiriendo más importancia los factores sociodemográficos, al tiempo que la influencia de la ideología disminuye.

Por lo que se refiere a *justicia*, los principales condicionantes son el nivel de estudios y el estatus socioeconómico. Concretamente, son las personas de clase alta y media-alta, urbanas e ilustradas, y de edades intermedias, quienes exigen mayor esfuerzo presupuestario en la Administración de justicia. Las preferencias de gasto se explican principalmente en función de la posibilidad de «consumir» justicia, pero las predisposiciones simbólicas apenas tienen impacto.

Las políticas de intervención en la economía

En esta área figuran las políticas de *obras públicas* y *transportes y comunicaciones*. En la primera, las dos variables más relevantes son el tamaño del hábitat y el sexo: los habitantes de los municipios pequeños y los hombres son más favorables a incrementar

TABLA 1. Influencia del interés propio, los valores y la ideología sobre las preferencias de gasto público de los ciudadanos por áreas de política (1985-2015)

	Tamaño hábitat	Sexo	Edad	Nivel de estudios	Estatus socio económico	Ingresos del hogar	Religiosidad	Práctica religión	Autoubicación ideológica	Identificación partido pol. ^a
Políticas de soberanía										
<i>Defensa</i>										
1985	-0,100**	0,053*	0,079**	-0,035					0,248**	0,283**
1990	0,001	0,069**	0,040	-0,059**					s.d.	0,288**
1995	0,012	0,030	0,079**	-0,053*	-0,027				0,170**	0,249**
2000	-0,023	0,062**	0,076**	-0,081**	0,018				0,184**	0,257**
2005	0,075**	0,006	0,024	-0,085**	0,021		-0,091**	0,092**	0,170**	0,254**
2010	0,011	0,023	-0,023	-0,067**	0,048*	-0,104**	-0,079**	0,088**	0,146**	0,178**
2015	-0,039	0,010	-0,026	-0,050*	0,005	-0,258**	-0,128**	0,074**	0,208**	0,258**
<i>Seguridad ciudadana</i>										
1985	-0,014	0,052*	0,069**	-0,015					0,261**	0,299**
1990	0,034	0,089**	0,052*	0,013					s.d.	0,317**
1995	0,013	0,033	0,056*	0,012	-0,061**				0,168**	0,309**
2000	0,111**	0,030	0,026	0,020	-0,014				0,057*	0,236**
2005	0,051*	0,033	0,093**	-0,073**	-0,048*		-0,039	0,024	0,024	0,247**
2010	-0,037	0,069**	0,092**	-0,043*	0,021	-0,086**	-0,060**	0,053**	0,056*	0,186**
2015	-0,001	0,030	0,037	-0,065**	0,036	-0,077**	-0,080**	0,013	0,110**	0,148**
<i>Justicia</i>										
1990	0,075**	-0,001	-0,014	0,026					s.d.	0,298**
1995	-0,014	0,020	-0,031	0,052**	-0,089**				0,056*	0,241**
2000	0,052*	0,020	0,020	0,073**	-0,048*				-0,062**	0,193
2005	0,039	0,016	0,067**	0,088**	-0,086**		0,001	0,013	-0,032	0,189
2010	-0,018	0,036	0,036	0,092**	-0,032	0,039	0,024	-0,075*	0,033	0,151**
2015	0,014	0,016	0,025	0,055*	-0,007	-0,043	0,034	-0,036	-0,100**	0,149
Políticas de intervención en la economía										
<i>Obras públicas</i>										
1985	0,100**	-0,019	-0,057*	0,066**					-0,095**	0,204
1990	-0,002	-0,055*	-0,022	0,060**					s.d.	0,242**
1995	-0,093**	-0,023	-0,020	0,030	-0,048*				0,024	0,235**
2000	-0,025	-0,076**	0,068**	0,031	-0,056*				-0,036	0,208**
2005	-0,107**	-0,084**	0,054*	-0,011	0,027		-0,022	0,014	0,007	0,214**
2010	-0,067**	-0,068**	0,037	-0,075**	0,054**	-0,061**	-0,029	0,051*	0,021	0,140*
2015	-0,098**	0,004	0,088**	-0,071**	0,041	-0,085**	-0,049**	-0,001	-0,053**	0,166*

TABLA 1. *Influencia del interés propio, los valores y la ideología sobre las preferencias de gasto público de los ciudadanos por áreas de política (1985-2015) (continuación)*

	Tamaño hábitat	Sexo	Edad	Nivel de estudios	Estatus socio económico	Ingresos del hogar	Religiosidad	Práctica religión	Autoubicación ideológica	Identificación partido pol. ^a
<i>Transporte y comunicaciones</i>										
1990	0,132**		0,020	-0,055*	0,114**				s.d.	0,306**
1995	-0,038		0,003	-0,020	0,044	-0,033			0,012	0,227*
2000	0,022		-0,011	0,024	0,040	-0,069**			-0,073**	0,191
2005	0,044*		0,005	-0,017	0,051*	-0,029	0,056*	-0,069**	-0,064*	0,207*
2010	-0,054		0,055*	0,085**	-0,084	-0,056*	-0,108**	0,053**	0,021	0,146*
2015	-0,095**		0,028	0,003	-0,036	0,038	-0,097**	0,011	-0,038	-0,084**
<i>Políticas de bienestar</i>										
<i>Vivienda</i>										
1985	0,151**		0,007	-0,047*	0,058*				-0,041	0,184
1990	0,163**		0,027	-0,028	0,055*				s.d.	0,247**
1995	0,115**		-0,014	-0,076**	0,114**	-0,079**			-0,036	0,221
2000	0,103**		0,022	-0,046*	0,066**	-0,008			-0,131**	0,152**
2005	0,105**		-0,001	-0,045*	0,102**	-0,081**	0,086**	-0,097**	-0,029	0,221**
2010	-0,007		0,061**	0,057*	-0,034	-0,009	-0,068**	0,082**	-0,080	-0,051*
2015	0,022		0,034	-0,025	-0,025	0,030	-0,093**	0,083**	-0,053	-0,210**
<i>Sanidad</i>										
1985	0,224**		-0,003	-0,083**	0,076**				-0,107**	0,261**
1990	0,085**		0,035	-0,058**	0,045*				s.d.	0,259**
1995	0,054*		-0,017	-0,071**	0,120**	-0,099**			0,046	0,241**
2000	0,022		0,017	0,005	0,032	-0,006			-0,056*	0,137*
2005	0,036		0,039	-0,018	0,042*	-0,031	0,041	-0,095**	-0,083**	0,207*
2010	0,024		0,072**	0,008	-0,012	-0,003	-0,047*	0,061**	-0,092**	-0,168**
2015	0,026		0,060**	-0,024	-0,018	-0,032	-0,049*	-0,039	-0,092**	-0,176**
<i>Enseñanza</i>										
1985	0,182**		0,031	-0,123**	0,153**				-0,006	0,177
1990	0,077**		0,016	-0,115**	0,153**				s.d.	0,273**
1995	0,107**		-0,003	-0,087**	0,157**	-0,085**			0,019	0,264**
2000	0,112**		0,024	-0,017	0,141**	-0,096**			-0,088**	0,206
2005	0,142**		0,012	-0,026	0,147**	-0,119**	0,083**	-0,084**	-0,052*	0,195
2010	0,058**		0,011	-0,163**	0,082**	-0,045**	-0,087**	0,055**	-0,044*	0,054*
2015	0,050*		0,082**	-0,030	0,024	0,047**	-0,091**	0,087**	-0,054*	0,016

TABLA 1. Influencia del interés propio, los valores y la ideología sobre las preferencias de gasto público de los ciudadanos por áreas de política (1985-2015) (continuación)

	Tamaño hábitat	Sexo	Edad	Nivel de estudios	Estatus socio económico	Ingresos del hogar	Religiosidad	Práctica religión	Autoubicación ideológica	Identificación partido pol. ^a
<i>Seguridad Social/Pensiones</i>										
1990	0,144**	0,034	0,042	-0,007					0,104**	0,243**
1995	0,084**	0,057**	0,023	0,005	-0,031				s.d.	0,270**
2000	0,032	0,053*	0,036	-0,022	0,040				0,022	0,209
2005	-0,006	0,068**	0,106**	-0,125**	0,054*				-0,115**	0,166**
2010	0,010	0,071**	0,018	-0,056*	0,076**	-0,149**	-0,053*	0,015	-0,093**	0,207*
2015	-0,012	0,091**	0,046*	-0,090**	0,079**	-0,102**	-0,034	0,091**	-0,080**	0,186**
<i>Protección por desempleo</i>										
1990	0,207**	0,005	-0,058**	0,021					s.d.	s.d.
1995	0,114**	-0,030	-0,124**	0,005	0,009				-0,039**	0,208
2000	0,084**	0,028	-0,080**	0,051**	0,025				-0,124**	0,265**
2005	0,031	0,047*	-0,091**	0,003	0,031		0,079**	-0,062**	-0,088**	0,146**
2010	0,006	0,060**	-0,060**	-0,114**	0,060**	-0,117**	0,015	-0,046**	-0,066**	0,160**
2015	0,052*	0,046*	-0,002	-0,058**	0,065**	-0,084**	0,062**	-0,170**	-0,170**	0,206**
<i>Cultura</i>										
1995	-0,014	0,020	-0,031	0,052**	-0,089**				-0,146**	0,234**
2000	0,052*	0,020	0,020	0,073**	-0,048*				-0,142**	0,234**
2005	0,039	0,016	0,067**	0,088**	-0,086**		0,086**	-0,116**	-0,119**	0,211*
2010	-0,018	0,036	0,036	0,092**	-0,032	0,039	0,082**	-0,110**	-0,091**	0,175**
2015	0,014	0,016	0,025	0,055*	-0,007	-0,043	0,083**	-0,027	-0,198**	0,206**
<i>Protección del medio ambiente</i>										
2000	0,114**	-0,029	-0,079**	0,151**	-0,087**				-0,164**	0,222*
2005	0,092**	0,011	-0,079**	0,155**	-0,150**		0,081**	-0,107**	-0,101**	0,232**
2010	0,032	0,043	0,105**	-0,048*	-0,114**	0,055**	0,146**	-0,126**	-0,091**	0,151*
2015	0,086**	0,021	-0,050*	0,116**	-0,077**	0,069**	0,153**	-0,018	-0,178**	0,179**

**Sig. $p < 0,010$, *Sig. $p < 0,050$. Correlaciones bivariadas.

^a La variable identificación con un partido político es de carácter nominal, por lo que se ha utilizado el coeficiente de contingencia, el cual varía entre 0 y 1, midiendo la intensidad de la relación pero no la dirección. Esta información se ha complementado con la procedente de las tablas de contingencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios 1465 de 1985, 1880 de 1990, 2187 de 1995, 2394 de 2000, 2615 de 2005, 2841 de 2010 y 3105 de 2015 del CIS, y Carrillo y Tamayo (2011: 209-215).

los recursos para infraestructuras. En la segunda, los principales determinantes de las demandas de gasto son, nuevamente, el hábitat y, después, el nivel de ingresos. Hasta los años noventa, quienes vivían en las ciudades percibían que se destinaban escasos recursos tanto a obras públicas como a

transporte mientras que, actualmente, las comunidades rurales muestran mayor interés en que se dedique más dinero a estos programas, debido a que el esfuerzo inversor se centró en las zonas urbanas.

Se constata que la religiosidad no es un factor condicionante y que la significación de

la orientación ideológica ha aumentado en el caso de transporte y comunicaciones⁵ desde la agudización de la crisis. En definitiva, el efecto de las variables sociodemográficas tiende a atenuarse y, en lo referente a los valores no se distingue una pauta clara. En general, los españoles perciben que se ha hecho una importante inversión en estas infraestructuras, las cuales benefician a casi todos.

Las políticas de bienestar

Comenzando por la política de *vivienda*, se hallaron asociaciones estadísticas que concuerdan con la teoría del autointerés, destacando la edad como el principal predictor. Los jóvenes hasta 34 años, la población urbana y las familias con menos ingresos son los grupos sociodemográficos que reclaman mayor inversión pública. Se ha encontrado también correlación entre esta demanda de gasto y el hecho de vivir de alquiler o en una casa cedida temporalmente a bajo precio por la empresa o la familia.

Asimismo, tiene cierta influencia la religión, no así la práctica de la religión: ateos y agnósticos apoyan en mayor medida el aumento de recursos para vivienda pública. La ideología resulta una variable significativa desde mediados de los noventa, los individuos de izquierdas consideran que el presupuesto es escaso, y las diferencias entre votantes de los distintos partidos son notables. Así, el número de electores de IU que consideran insuficiente la inversión en vivienda supera en 30 puntos porcentuales al número de electores del PP.

En cuanto a *sanidad*, el grado de correlación con las variables explicativas es desigual, oscilando a lo largo del tiempo. Durante los años ochenta y noventa, los habitantes del medio urbano, los adultos entre 25 y 44 años y las personas más instruidas demandaban

más recursos sanitarios. Estos factores no resultan significativos posteriormente y, durante este siglo, el apoyo al gasto en sanidad es mayor entre las mujeres y las familias con pocos ingresos. Se incluyó, como posible predictor, el tipo de servicios sanitarios utilizado —públicos, privados o ambos— pero, existiendo relación estadística, apenas varían las actitudes hacia el gasto en función del consumo de sanidad pública o privada.

Los factores sociodemográficos han sido tradicionalmente los que más han incidido en las preferencias, pero desde 2010 adquiere importancia la religiosidad y, progresivamente, la ideología. Los entrevistados de izquierda, principalmente los votantes de IU, piden mayor financiación para sanidad, en un contexto de reducción presupuestaria.

Otra política esencial del Estado de bienestar es la *enseñanza*. Aquí las demandas de gasto dependen del tamaño del hábitat, el nivel de estudios, la clase social y los ingresos del hogar. Los ciudadanos que viven en municipios grandes⁶, más instruidos, de estatus medio-alto y aquellos con menos ingresos afirman que es necesario incrementar el presupuesto para educación. Curiosamente, ninguno de los indicadores del interés individual considerados —tener hijos en edad escolar, o tener hijos estudiando con una beca, o haber estudiado en un centro público la enseñanza obligatoria— está asociado con las preferencias.

Las actitudes están cada vez más condicionadas por las predisposiciones simbólicas, amén de la influencia del interés propio. La religión es una variable destacada debido, probablemente, al papel de los colegios concertados de la Iglesia católica y a los conflictos relativos a la asignatura de religión en los planes educativos. Pero la orientación ideológica no fue determinante hasta el comienzo de la crisis y, a partir de 2011, hay un cla-

⁵ Los votantes de todos los partidos afirman que los recursos destinados a obras públicas son suficientes.

⁶ En muchas ciudades, la demanda de plazas escolares públicas supera a la oferta, y además es necesario establecer servicios añadidos, como comedor.

ro incremento de la demanda de recursos para educación por parte de los electores de partidos de izquierdas. Ténganse en cuenta los sustanciales ajustes en los programas educativos que ha realizado el gobierno del PP y el debate entre partidos sobre la privatización de la enseñanza. En este sentido, Eismeier (1982: 138) afirmaba que las diferencias ideológicas tienen mayor impacto en las preferencias sobre educación o sanidad, en programas cuyas bases intelectuales y políticas están en el Estado de bienestar.

Mención aparte merecen las dos políticas de transferencia de rentas, *seguridad social* y *protección por desempleo*, que afectan directamente la situación material personal. Las preferencias de gasto en materia de pensiones correlacionan en algún momento con cada indicador del interés propio, aunque no de forma constante ni con la misma intensidad. Los predictores esenciales son: ingresos del hogar, nivel de estudios, estatus socioeconómico y sexo. Es decir, los individuos con escasos recursos, las personas con menos formación y las mujeres (especialmente las viudas) se muestran más partidarios de aumentar tales prestaciones. Además, hasta mediados de la década pasada, el apoyo a este programa era mayor entre los obreros cualificados y no cualificados, pero, a medida que avanza la recesión, crece el apoyo entre las viejas y nuevas clases medias.

Las preferencias de gasto en desempleo están relacionadas con estas mismas variables, aunque el factor primordial es la edad. Como se preveía, la demanda de recursos procede principalmente de los más jóvenes, también de individuos con menor instrucción, de obreros y de personas con menos ingresos, es decir, los colectivos más azotados por el paro. No obstante, durante la crisis todos los grupos sociodemográficos y económicos reclaman un aumento de estas prestaciones.

La identificación con un partido político tiene también cierta incidencia, sobre todo respecto al subsidio por desempleo. Los vo-

tantes de IU y PSOE son fuertemente partidarios de incrementar los recursos y, nuevamente, se observa que el cambio de ciclo económico ha polarizado las posturas de los electores de los distintos partidos.

Finalmente, se enumeran las variables que influyen en las opiniones sobre el gasto destinado a las políticas posmaterialistas, etiqueta referida a la *cultura* y *protección del medio ambiente*. La demanda de gasto en *cultura* depende del tamaño del hábitat, el nivel de estudios, la clase social y el nivel de ingresos. Quienes viven en municipios grandes desean el aumento del presupuesto destinado a cultura —tienen mayor facilidad de acceso—, así como las personas más formadas, de clase alta y aquellas que disponen de bastantes ingresos.

Las actitudes hacia la inversión pública en *protección del medio ambiente* están asociadas con todas las variables seleccionadas, excepto el sexo. Edad y estatus afectan negativamente a la intensidad de la demanda, mientras que el hábitat, la formación y los ingresos familiares tienen una asociación positiva.

Las preferencias en estos dos programas dependen tanto de los intereses como de las predisposiciones simbólicas y, aun teniendo algo más de peso el interés propio, el impacto de los valores tiende a crecer. Religiosidad y práctica de la religión afectan a la demanda de recursos —especialmente en medio ambiente—, así como la ideología y la adscripción a un partido. En ambas políticas, la formación de preferencias responde a los planteamientos del modelo postmaterialista de Inglehart (1998).

DISCUSIÓN: ¿SOMOS LOS ESPAÑOLES EGOÍSTAS EN NUESTRAS PREFERENCIAS DE GASTO PÚBLICO?

La principal conclusión de la investigación presentada es que en España, como sucede en otros países de nuestro entorno, tanto los factores demográficos y socioeconómicos

TABLA 2. Resumen de los principales determinantes individuales de las preferencias de gasto público de los ciudadanos

Política de defensa	Política de orden público	Política de justicia	Política de obras públicas
<ul style="list-style-type: none"> - Nivel estudios – - Ingresos del hogar – - Religiosidad – - Práctica religión + - Ideología +: derecha - Identificación partidos derecha 	<ul style="list-style-type: none"> • Edad + • Nivel estudios – • Ingresos del hogar – • Religiosidad – • Práctica religión + • Ideología +: derecha • Identificación partidos derecha 	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel estudios + - Estatus – - Ingresos – 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat – • Sexo – • Ingresos del hogar – • Identificación partidos izquierda
Política de transporte y comunicaciones	Política de vivienda	Política de sanidad	Política de educación
<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño hábitat – - Ingresos – - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat + • Edad – • Nivel estudios + • Ingresos del hogar – • Religiosidad + • Ideología -: izquierda • Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> - Ingresos del hogar – - Práctica religión – - Ideología -: izquierda - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat + • Nivel estudios + • Estatus – • Ingresos del hogar – • Religiosidad + • Práctica religión • Identificación partidos izquierda
Política de seguridad social	Política de desempleo	Política de cultura	Política de medio ambiente
<ul style="list-style-type: none"> - Sexo + - Nivel estudios – - Estatus + - Ingresos del hogar – - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Edad – • Nivel estudios – • Ingresos del hogar – • Práctica religión – • Ideología -: izquierda • Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño hábitat + - Nivel estudios + - Estatus – - Ingresos del hogar + - Religiosidad + - Práctica religión – - Ideología -: izquierda - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat + • Edad – • Nivel estudios + • Estatus – • Religiosidad + • Práctica religión – • Ideología -: izquierda • Identificación partidos izquierda

Nota: los signos + o - indican la orientación de las relaciones causales entre las variables descritas en epígrafes anteriores.
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos estadísticos de la tabla 1.

como las creencias y la ideología juegan un papel significativo en la formación de las preferencias de gasto (tabla 2). Esto implica que la teoría del interés propio y la perspectiva de las predisposiciones simbólicas son, desde un punto de vista empírico, válidas para el caso español, aunque con matices.

Los resultados obtenidos son consistentes con las dos primeras hipótesis: los intereses individuales basados en motivaciones económicas (H_1) y, simultáneamente, los valores y la orientación ideológica (H_2) condicionan el grado de apoyo a cada programa de gasto, y ambas explicaciones no son excluyentes. Esta afirmación exige varias puntualizaciones.

Primera, los análisis realizados indican que, si bien las características sociodemográficas y socioeconómicas son predictores relevantes de las demandas de gasto público de los españoles en todas las políticas, fundamentalmente en el área de bienestar pero también en los programas de transferencia de rentas y en justicia, el grado de asociación estadística es moderado, por lo que la capacidad explicativa del modelo es limitada, como confirman estudios previos (Sears y Funk, 1990). Esto no implica que los resultados sean poco significativos. Así, se ha constatado que las personas más beneficiadas por las prestaciones públicas, así como los colectivos socioeconómicamente más vulnerables —bajo nivel de ingre-

sos, individuos con escasa formación, jóvenes, etc.—, apoyan generalizadamente el aumento del gasto público, conclusión que es un lugar común en la literatura sobre el interés propio (véanse, especialmente, Sanders, 1988; Rudolph y Evans, 2005).

Segunda, de acuerdo con Henderson *et al.* (1995: 40), se confirma que el principal predictor de las preferencias es el nivel de ingresos familiares, variable asociada con la demanda de gasto público en las doce políticas estudiadas. Los ciudadanos con menos ingresos desean que se incremente la financiación de prácticamente todos los programas porque valoran que les compensa el intercambio entre impuestos pagados y prestaciones recibidas, mientras que aquellos con altos ingresos no consideran que tengan posibilidad ni necesidad de acceder a tales prestaciones.

Tercera, pese a que trabajos previos sostienen que las actitudes hacia el gasto están condicionadas negativamente por el estatus socioeconómico —indicador asociado con los ingresos y la formación—, porque las personas de clase media y alta son menos favorables a mantener los recursos públicos en programas que no necesitan utilizar (Himmelstein y McRae, 1988; Svallfors, 2003), en España el grado de asociación es relativamente bajo, excepto en enseñanza, pensiones, cultura y medio ambiente. Curiosamente, la clase media, y cada vez más la clase alta, apoyan ciertas políticas por considerarlas beneficiosas para el conjunto de la sociedad, cuestión simbólica que concordaría con el enfoque sociotrópico (Kinder y Kiwet, 1981).

Cuarta, el nivel de formación del individuo, según los estudios revisados, debe correlacionar negativamente con el grado de apoyo al gasto público (Linós y West, 2003; Jæger, 2006), tesis que se cumple en las políticas de soberanía, seguridad social y desempleo, pero existe una correlación positiva en el caso de las políticas postmaterialistas, de enseñanza y de justicia. No obstante, los

efectos del nivel educativo parecen reflejar el estatus socioeconómico más que el apoyo diferenciado a ciertos programas.

Quinta, atendiendo a las premisas de Hasenfeld y Rafferty (1989: 1042) y Sanders (1988: 320-321), se esperaba que mujeres y jóvenes, grupos socioeconómica y laboralmente más vulnerables, fuesen favorables a muchos programas de gasto. Las mujeres solo se muestran más partidarias que los hombres hacia el gasto en seguridad social. Por otra parte, los jóvenes demandan más recursos para vivienda, educación y prestaciones por desempleo, datos consistentes con la teoría del autointerés; pero también para medio ambiente, en línea con las tesis del postmaterialismo (Inglehart, 1998).

En el ámbito de las predisposiciones simbólicas, se ha encontrado evidencia empírica suficiente de que la ideología explica la preferencia por mayor o menor gasto público en numerosas áreas (H_2), si bien su impacto es más débil de lo previsto por algunas publicaciones que consideraban esta variable como el modulador principal de las actitudes hacia el gasto. Los datos indican que el factor esencial es la identificación con un partido político, y que, efectivamente, los ciudadanos que votan a partidos de izquierda apoyan el incremento de los recursos en la mayoría de programas. Estos hallazgos coinciden con los resultados de numerosas investigaciones sobre condicionantes de las actitudes hacia el Estado de bienestar (*v.g.* Jacoby, 1991; Blekesaune y Quadagno, 2003; Arriba *et al.*, 2006), las cuales concluyen que votar a un determinado partido está asociado con creencias ideológicas arraigadas —el apoyo al intervencionismo público, la defensa del Estado de bienestar o de la equidad (Shivo y Uusitalo, 1995; Funk, 2000)—, las cuales afectan a las preferencias de gasto.

Al mismo tiempo, como se pronosticaba inicialmente (H_3), el impacto del interés propio y de las predisposiciones simbólicas varía significativamente de una política a otra.

Las personas utilizan distintos criterios en la articulación de sus demandas de gasto en cada área, según pone de manifiesto este estudio estadístico. Es lógico suponer que, en esa articulación, incide que sean programas universalistas o sectoriales, prestaciones contributivas o dirigidas a grupos de renta baja, políticas generalistas o de equidad, etc.

Por ejemplo, en las políticas de transferencias de renta o en vivienda, la demanda de gasto proviene fundamentalmente de quienes creen que pueden verse beneficiados por estas prestaciones. En otras políticas, el condicionante primordial son los valores. Así, la demanda de gasto en defensa procede en gran parte de electores de derecha que defienden el refuerzo del área de soberanía por una cuestión de cultura política. Por el contrario, la demanda de gasto en materia de medio ambiente y cultura proviene principalmente de electores de izquierda y de los jóvenes, pues se trata de programas tradicionalmente asociados a los partidos de izquierda y a los valores propios del postmaterialismo (Inglehart, 1998).

Finalmente, el análisis confirma el incremento de la importancia de los «intereses» frente a las «cuestiones simbólicas» durante períodos de crisis graves y prolongadas (H_4), ya que en este contexto muchas personas ven menguada su capacidad económica y pasan a estar en situación de riesgo, convirtiéndose en usuarios de prestaciones públicas que antes no necesitaban. Esto parece ocurrir en aquellas políticas que afectan a la seguridad material de las personas. En paralelo, aparece la tendencia contraria: aumenta el impacto de la ideología en la demanda de gasto en ciertas políticas, especialmente en sanidad, seguridad social, protección del desempleo o educación; políticas del núcleo duro del sistema de bienestar que han sufrido reducciones presupuestarias. Presumiblemente, los electores de derecha apoyarán las medidas de ajuste del partido gobernante, suscribiendo el discurso neoliberal so-

bre la necesidad de reducir la intervención pública. Según Calzada y Del Pino (2013), estos votantes, muchos de ellos con elevados ingresos y de clase media y alta, parecen volverse más reacios a financiar el gasto destinado a los grupos desfavorecidos. Y los electores de izquierdas, tradicionalmente defensores de las políticas sociales, incrementarán su apoyo al gasto en contra de las medidas del gobierno, entendiéndolo que deben proteger el Estado de bienestar independientemente de sus intereses individuales. Se observa, pues, una polarización de las actitudes debido a la ideología, lo que apoyaría la tesis de Brooks y Manza (2013) relativa a que las crisis producen un giro a la izquierda de buena parte de la opinión pública, ampliándose la demanda de gasto social.

Queda contestar a la pregunta originaria: en la formación de las preferencias de gasto, a los españoles, ¿nos mueve el interés propio o nos condicionan los valores? La respuesta no es concluyente, pues las actitudes son multidimensionales y es complicado separar empíricamente el papel que juegan el autointerés y la ideología en la configuración de las preferencias. Nos movemos por el interés propio porque es atávico en la conducta humana, pero existe un efecto inherente de los valores y la ideología. Para profundizar en este tema se realizará en el futuro un modelo de regresión que analice el impacto combinado de las variables seleccionadas sobre las actitudes, controlando el efecto de la multicolinealidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Andreß, Hans-Jürgen y Heinen, Thorsten (2001). «Four World of Welfare State Attitudes? A Comparison of Germany, Norway and United States». *European Sociological Review*, 17(4): 337-356.
- Arriba, Ana et al. (2006). *Los ciudadanos y el Estado de Bienestar en España (1985-2005)*. Madrid: CIS.
- Bergstrom, Theodore y Goodman, Robert (1973). «Private Demands for Public Goods». *American Economic Review*, 63(3): 280-296.

- Birdsall, William (1965). «A Study of Demand for Public Goods». En: Musgrave, R. A. (comp.). *Essays in Fiscal Federalism*. Washington: The Brookings Institution.
- Blekesaune, Morten y Quadagno, Jill (2003). «Public Attitudes toward Welfare State Policies: A Comparative Analysis of 24 Nations». *Sociological Review*, 19(5): 415-427.
- Brooks, Clem y Manza, Jeff (2013). «A Broken Public? Americans' Responses to the Great Recession». *American Sociological Review*, 78(5): 727-748.
- Calzada, Inés y Pino, Eloísa del (2013). «Algo cambia, algo permanece: los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos durante la crisis (2008-2012)». *Presupuesto y Gasto Público*, 71: 165-186.
- Carrillo, Ernesto y Tamayo, Manuel (2011). «La formación de las preferencias de gasto público: Un análisis comparado por políticas públicas». *Frontera norte*, 23(45): 193-229.
- Citrin, Jack (1979). «Do People Really Want Something for Nothing: Public Opinion on Taxes and Government Spending». *National Tax Journal*, 32(2): 113-129.
- Citrin, Jack y Green, Donald (1990). «The Self-Interest Motive in American Public Opinion». *Research in Micropolitics*, 3(1): 1-28.
- Deacon, Robert y Shapiro, Perry (1975). «Private Preference for Collective Goods Revealed through Voting on Referenda». *American Economic Review*, 65:943-955.
- Diamond, Patrick y Lodge, Guy (2013). «European Welfare States after the Crisis». *Policy Network/ IPPR Paper* (en línea). <http://www.policynetwork.net/publications/4320/European-Welfare-States-after-the-Crisis>, acceso junio de 2013.
- Eismeier, Theodore (1982). «Public Preferences about Government Spending: Partisan, Social, and Attitudinal Sources of Policy Differences». *Political Behaviour*, 4(2): 133-145.
- Erikson, Robert et al. (1989). «Political Parties, Public Opinion, and State Policy». *American Political Science Review*, 83(03): 729-750.
- Feldman, Stanley (1982). «Economic Self-Interest and Political Behavior». *American Journal of Political Science*, 3(26): 446-466.
- Ferris, James (1983). «Demands for Public Spending: An Attitudinal Approach». *Public Choice*, 40(2): 135-152.
- Forma, Pauli (1999). *Interests, Institutions and the Welfare State: Studies on Public Opinion towards the Welfare State*. Turku: STAKES, University of Turku.
- Funk, Carolyn (2000). «The Dual Influence of Self-Interest and Societal Interest in Public Opinion». *Political Research Quarterly*, 53(1): 37-62.
- Hasenfeld, Yeheskel y Rafferty, Jane (1989). «The Determinants of Public Attitudes toward the Welfare State». *Social Forces*, 67(4): 1027-1048.
- Henderson, Tammy L., et al. (1995). «Explaining public opinion toward government spending on child care». *Family relations*, 44(1): 37-45.
- Himmelstein, Jerome y McRae, James (1988). «Social Issues and Socioeconomic Status». *Public Opinion Quarterly*, 52(4): 492-512.
- Inglehart, Ronald (1998). *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: CIS.
- Jacoby, William (1991). «Ideological Identification and Issue Attitudes». *American Journal of Political Science*, 35(1): 178-205.
- Jacoby, William (1994). «Public Attitudes toward Government Spending». *American Journal of Political Science*, 38(2): 336-361.
- Jæger, Mads (2006). «Whats Makes People Support Public Responsibility for Welfare Provision: Self-interest or Political Ideology?». *Acta Sociológica*, 49(3): 321-338.
- Kinder, Donald y Kiewiet, Roderick (1981). «Sociotropic Politics: The American Case». *British Journal of Political Science*, 11(2): 129-161.
- Kristensen, Ole (1982). «Voter Attitudes and Public Spending: Is There a Relationship?». *European Journal of Political Research*, 10(1): 35-52.
- Lau, Richard y Heldman, Caroline (2009). «Self-interest, Symbolic Attitudes, and Support for Public Policy: A Multilevel Analysis». *Political Psychology*, 30(4): 513-537.
- Lewin, Leif (1991). *Self Interest and Public Interest in Western Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Lewis, Alan (1983). «Public Expenditures: Perceptions and Preferences». *Journal of Economic Psychology*, 3(2): 159-167.
- Linos, Katerina y West, Martin (2003). «Self-interest, Social Beliefs and Attitudes to the Redistribution: Re-addressing the Issue of Cross-national Variations». *European Sociological Review*, 19(4): 393-409.

- Margalit, Yotam (2013). «Explaining Social Policy Preferences: Evidence from the Great Recession». *American Political Science Review*, 107(1): 80-103.
- Monroe, Alan (1979). «Consistence between Public Preferences and National Policy Decisions». *American Politics Quarterly*, 7: 3-19.
- Mouritzen, Poul (1987). «The Demanding Citizen: Driven by Policy, Self-Interest or Ideology?». *European Journal of Political Research*, 15(4): 417-435.
- Pino, Eloísa del (2005). *¿Se han modificado las preferencias de los ciudadanos sobre las políticas del Bienestar en España?*. Documento de Trabajo, 05-05. Madrid: Unidad de Políticas Comparadas (CSIC).
- Pino, Eloísa del, et al. (2011). *La administración a juicio de los ciudadanos: actitudes hacia el gasto público*. Madrid: AEVAL.
- Rudolph, Thomas y Evans, Jillian (2005). «Political Trust, Ideology, and Public Support for Government Spending». *American Journal of Political Science*, 49(3): 660-671.
- Sanders, Arthur (1988). «Rationality, Self-Interest, and Public Attitudes on Public Spending». *Social Science Quarterly*, 69(2): 311-324.
- Sears, David et al. (1980). «Self-Interest vs. Symbolic Politics in Policy Attitudes and Presidential Voting». *American Political Science Review*, 74(3): 670-684.
- Sears, David y Funk, Carolyn (1990). «The Limited Effect of Economic Self-Interest on the Political Attitudes of the Mass Public». *Journal of Behavioral Economics*, 19(3): 2-91.
- Sears, David y Funk, Carolyn (1991). «The Role of Self-Interest in Social and Political Attitudes». *Advances in Experimental Social Psychology*, 24(1): 1-91.
- Shockkaert, Erick (1987). «Preferences and Demand for Local Public Spending». *Journal of Public Economics*, 34(2): 175-188.
- Shivo, Tuire y Uusitalo, Hannu (1995). «Attitudes towards the Welfare State. Evidence from Finland». *Scandinavian Journal of Social Welfare*, 4(4): 215-223.
- Svallfors, Stefan (2003). «Welfare Regimes and Welfare Opinions: A Comparison of Eight Western Countries». *Social Indicators Research*, 64(3): 495-520.
- Taylor-Gooby, Peter (1983). «Moralism, Self-interest and Attitudes to Welfare». *Policy and Politics*, 11(2): 145-160.

RECEPCIÓN: 14/09/2016

REVISIÓN: 26/01/2017

APROBACIÓN: 18/04/2017

Public Expenditure Preferences in Spain: Self-interest or Values?

Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?

Ruth Cicuéndez Santamaría

Key words

Public Spending
 • Self-Interest
 • Public Opinion
 • Public Policies
 • Symbolic
 Predispositions

Palabras clave

Gasto público
 • Interés propio
 • Opinión pública
 • Políticas públicas
 • Predisposiciones
 simbólicas

Abstract

This article analyses the factors that condition the public expenditure preferences of citizens in Spain. It focuses on the role that individuals' economic motivations, ideology and values play in forming these preferences. Two theories were selected for this purpose: self-interest theory and symbolic predispositions. An empirical analysis showed that demographic and economic characteristics such as citizens' ideology and values influence how specific demands for public spending are articulated. In addition, the best predictors of the preferences in each public spending programmes are identified. The conclusion is that the impact of self-interest and symbolic predispositions varies significantly depending on the nature of the different public policies.

Resumen

En este artículo se analizan algunos de los factores que condicionan las preferencias de gasto público de los ciudadanos en España, centrándose en el papel que juegan las motivaciones económicas de los individuos, su ideología y sus valores. Para abordar estas cuestiones, se han aplicado dos teorías: la del interés propio y la de las predisposiciones simbólicas. El análisis empírico demuestra que tanto las características sociodemográficas y económicas como la ideología y las creencias de los ciudadanos influyen en la articulación de las demandas específicas de gasto público. Además, se identifica cuáles son los mejores predictores de las preferencias en cada programa de gasto, concluyendo que el impacto del interés propio y de las predisposiciones simbólicas varía significativamente en función de la naturaleza de las diferentes políticas públicas.

Citation

Cicuéndez Santamaría, Ruth (2017). "Public Expenditure Preferences in Spain: Self-interest or Values?". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 160: 19-38. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.160.19>)

Ruth Cicuéndez Santamaría: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid | ruth.cicueendez@urjc.es

INTRODUCTION

The analysis of citizen preferences about public expenditure has long been based on economic doctrines, especially on rational choice theory, and has focused on the effect that economic motivations have on social preferences. However, Sociology and Political Science went a step further by introducing ideology and values into the analysis, as potential determinants of socio-political attitudes.

The purpose of this paper is to advance the study of the polyhedral process concerning the formation of collective preferences about public expenditure. For this purpose, two traditionally antagonistic theories have been considered here as being complementary, and have been used to interpret attitudes: self-interest, and the symbolic politics perspective. The intention of this study is to verify whether Spanish citizens prioritise public spending on policies that benefit them personally, or if the level of support for policies depends pre-eminently on their ideological positions.

The empirical research on the determinants of the formation of public spending preferences is complex, and it does not seem possible to identify a single typology of variables that would explain this process for all public policies (Monroe, 1979; Jacoby, 1994; Carrillo and Tamayo, 2011). Much of the academic literature has argued that socio-demographic characteristics—as expressions of individual interests—together with ideological variables, are the main determinants of attitudes toward spending (Sears *et al.*, 1980; Lewis, 1983; Mouritzen, 1987; Jæger, 2006).

In line with the above, this paper seeks to answer two questions: What variables are the best predictors of the formation of spending preferences of Spaniards over time, self-interest or symbolic politics perspectives? Does the impact of both types of determinants vary from one public policy to another? To this end, the correlation of cer-

tain socio-demographic and ideological characteristics with the demand for spending in different programmes was measured.

The novelty of this study is that its methodological design combines a longitudinal analysis (in order to observe how the effect of these factors evolves), with a sectoral analysis by public policies (in order to identify which variables exert a greater influence on preferences in each area).

The theories on which the empirical study was based are presented first. Then the methodology, data and variables used are detailed, together with a formulation of the research hypotheses. Afterwards the results will be presented, followed by a discussion of the findings and limitations of the study.

ANALYTICAL FRAMEWORK: SELF-INTEREST AND VALUES

The analytical framework on which this study is based considers two recurrent theories in the study of public opinion. The first is the ‘theory of self-interest’, which suggests that individual preferences about public policies are shaped by a rational evaluation of the costs and benefits associated with each programme (Citrin, 1979: 122). The second, the ‘symbolic politics perspective’, argues that social attitudes basically depend on the ideology and values internalised by each person during the socialisation process (Eis-meier, 1982; Henderson *et al.*, 1995).

The economic motivations of the individual: the theory of self-interest

A definition of ‘self-interest’ is mandatory. Sears and Funk (1991: 16) outlined an operational concept in the following terms: ‘particular attitudinal position in terms of (1) its short to medium-term impact on the (2) material well-being of the (3) individual’s own personal life (or that of his or her immediate family). In the light of this concept, self-inter-

est is understood in its more individualistic economic meaning; that is, the more interested a person is in certain public programmes, the more likely they are to develop positive attitudes towards them, and to favour the increase of the expenditure allocated to funding them. This implies that citizens tend to make choices, political or otherwise, that can increase their wealth, power or prestige (Citrin and Green, 1990) or, in the case of public policies, choices that contribute to improving their material security.

Birdsall (1965: 238 and ff.) was one of the first economists to consider that the individual is, above all, a 'personal profit maximiser', who will try to raise their welfare to the 'maximum.' His model assumes that private demand for expenditure is based on a rational analysis of the costs and benefits of each programme, and can be explained by resorting to the variables used in the economic theory of the consumption of goods: sociodemographic characteristics, income, public goods consumed, etc. (Birdsall, 1965: 283-284).

Using this model, sociological and political studies¹ have applied the self-interest hypothesis to explain how the demand for public expenditure occurs, assuming that 'man is selfish, rational, and maximises his utility' (Citrin and Green, 1990: 1). Along the same lines, Sears and Funk (1991: 4) stated that three basic tendencies determine the formation of socio-political attitudes: rationality, materialism and egoism; and self-interest is a conjunction of all three.

The basic theory of self-interest, adapted to the subject under study, proposes that those citizens who need certain public benefits in the present or in the future, whether for themselves or for their families, will be more in favour of increasing the resources allocated to those policies, according to the 'un-

derdog' hypothesis (Hasenfeld and Rafferty, 1989: 1030).

The empirical verification of this popular theory is complex, as disparate results are obtained from its application. Some studies support this thesis, and have concluded that utilitarian and selfish attitudes predominate in people (Kristensen, 1982). Others have shown that citizens are primarily motivated by public interest or altruism (Kinder and Kiewiet, 1981; Lewin, 1991). A third group of publications have confirmed that a combination of both selfish behaviour and altruistic motives are determinants (Ferris, 1983; Mouritzen, 1987; Funk, 2000). Extensive statistical evidence has confirmed that economic motivations by themselves do not explain public spending preferences (Sears and Funk, 1991; Andreß and Heinen, 2001; Linos and West, 2003; Lau and Heldman, 2009), and it has been argued that ideology moderates the impact of material interests on the configuration of preferences (Eismeier, 1982: 136).

The role of the symbolic politics perspective in the formation of preferences

The rise of economic doctrines has contributed to research focused on the effect of values on social attitudes being relegated to second-tier status. But, since the 1970s, many papers devoted to the study of preferences have proved that, while support for public spending is a function of self-interest, other variables such as ideology and political party affiliation have a significant influence. Certain studies have argued that self-interest is not the determining factor in expenditure demands, but rather the ideological self-positioning of citizens (Schokkaert, 1987: 182), so preferences must be interpreted in terms of ideological orientation and political affiliation rather than in utilitarian terms (Lewis 1983: 161).

According to the symbolic politics perspective, specific attitudes towards public po-

¹ See Sears *et al.* (1980), Feldman (1982), Ferris (1983), Taylor-Gooby (1983), Lewin (1991), Jacoby (1994), Tamayo and Carrillo (2011), among many others.

licies are based on the symbolic relationship that each person establishes between these policies and their own values, internalised from an early age and in the long term (Sears *et al.*, 1980: 683). Based on this thesis, four important approaches have been identified. First, the preferences of the individual are the result of their socialisation during infancy, that is, they are emotional responses –symbolic preferences– learned through early training experiences (Citrin and Green, 1990: 4). Second, opinions are primarily determined by the values acquired during that stage of socialisation and they find accommodation in an ideology that will also condition preferences (Sears and Funk, 1990: 72-75). Third, some socio-political attitudes will have developed without the individual having made any evaluation of their needs (Sears *et al.*, 1980: 671). Fourth, the level of individual support for spending on each programme will correlate with the individual's general system of political orientations and ideological beliefs (Hasenfeld and Rafferty 1989: 1042).

In conclusion, in the evaluation process, a series of underlying symbolic predispositions are activated in subjects that operate when formalising their attitudes and demands, and this is also the case for public expenditure (Jacoby, 1994). But the influence of ideological positioning is different in each policy because they have different characteristics, recipients and impacts (Rudolph and Evans, 2005: 662).

Self-interest and symbolic predispositions: linking theories

The international literature on public opinion and the Welfare State from the 1980s onwards included studies on the conditioning factors of attitudes towards welfare. These studies have provided abundant empirical evidence that ideological factors and self-interest are the main predictors of attitudes toward the Welfare State in their different dimensions (Taylor-Gooby, 1983; Hasenfeld and Rafferty, 1989;

Sears and Funk, 1991; Lau and Heldman, 2009). The same results were obtained in comparative studies (Andreß and Heinen, 2001; Blekesaune and Quadagno, 2003; Lianos and West, 2003; Jæger, 2006).

Similarly, research focused on the study of attitudes towards spending has shown that individual attributes that express self-interest, ideology, and beliefs are the primary determinants that interact in the preference-formation process (Citrin, 1979; Sanders, 1988; Jacoby, 1994; Rudolph and Evans, 2005). There is no agreement, however, on whether a greater predictive capacity is shown by self-interest or symbolic predispositions (Sears *et al.*, 1980).

The different publications on the subject agree that citizen preferences and their determinants vary considerably according to the public policy sector (Eismeier, 1982; Rudolph and Evans, 2005), although they have tended to analyse a small number of policies. Even if it were possible to identify a battery of variables that systematically affected attitudes towards a specific area, such as is the case for welfare programmes according to Jacoby (1994), the degree of influence of each variable in the formation of preferences differs from one policy to another (Monroe, 1979; Sanders, 1988).

In the current context of the international financial crisis, citizens have changed their demands for public spending, giving priority to increasing resources in welfare programmes and promotion of economic growth, compared to other policies such as environment or cultural policies (Diamond and Lodge, 2013: 7). Therefore, it is logical to assume that material interests will be given more importance than values. Diamond and Lodge (2013) studied the situation in Europe, as did Brooks and Manza (2013) in the United States, and concluded that during the recession citizens support spending policies in which they have a direct interest, especially those that affect their material well-being. It may

also happen that at this moment of uncertainty, many citizens perceive that it is imperative to defend the Welfare State and its essential values, and therefore opinions become polarised (Forma, 1999). In addition, the impact of the crisis is unequal, and support for spending on social policies by those most affected could increase, while the preferences of the rest of the population remain unchanged (Margalit, 2013).

In Spain, some well-reputed studies have described public expenditure attitudes and some have investigated preferences and their determinants (del Pino, 2005; Arriba *et al.*, 2006; del Pino, *et al.*, 2011; Carrillo and Tamayo, 2011; Calzada and del Pino, 2013). It has been observed that Spaniards have shown a clear support for a continuous increase in resources in almost all policy areas, mainly in welfare programmes (del Pino, *et al.*, 2011: 39-42) and that, while with some fluctuations, that tendency has been maintained during the economic crisis (Calzada and del Pino, 2013: 179-181). It has also been verified that certain socio-demographic characteristics, together with ideology, are the main explanatory factors of their demands for expenditure, at least on social policies (Arriba *et al.*, 2006: 78-80). However, in Spain the impact of self-interest and values is limited and varies significantly from one policy to another (Carrillo and Tamayo, 2011: 215-216).

In short, preferences are contingent and are conditioned by multiple variables, but what remains to be answered is: what are the best predictors in each public policy?

METHODOLOGY: DATA, VARIABLES AND HYPOTHESES

Data from the annual 'Public Opinion and Fiscal Policy' survey from the Centre for Sociological Research (*Opinión Pública y Política Fiscal* (CIS)) were used to apply the theories outlined above to the case of Spain.

These are twenty-seven national quantitative studies, with a sample ranging from between 2,400 and 2,500 respondents, conducted between 1985 and 2015². Table 1 describes the analysis variables, constructed using questions that were included in the studies.

The dependent variable—individual preferences about expenditure on each public policy—was covered by using a question related to the intensity of the demand for expenditure on twelve different programmes. The independent variables selected were those previously tested in the literature reviewed on the subject, differentiating between those related to self-interest and those referring to values and ideology.

Regarding the theory of self-interest, the following hypothesis was initially proposed: *low-income people, lower-class people, low-educated people, the young and the elderly, regular users of public services and beneficiaries of transfer policies, people at high risk of poverty or unemployment, and residents in medium and large municipalities, will show greater support for public spending dedicated to funding the main policies.* To test this hypothesis, certain variables were chosen, with the causal mechanisms explained below.

Income level and social class are, according to the literature, excellent indicators of self-interest (Sanders, 1988; Himmelstein and McRae, 1988). People with lower income and low socio-economic status, clearly favoured by tax-benefit exchange, are more interested in large resources being allocated to major spending programmes than higher-class and high-income groups, who bear the tax burden even though they are unlikely to use such benefits (Svallfors, 2003).

² Data from 1985 and 2015 were analysed on a year-by-year basis. Due to the length of the article, only data corresponding to selected dates are included. Likewise, analyses were carried out to show if there was a correlation between the demand for spending on some policies and the fact of being a user or beneficiary of these benefits. For detailed information, contact the author.

CHAPTER 1. *Description of variables and indicators*

Variables	Questions taken as an indicator	Variable values
Dependent variable		
Spending preferences for each public policy	The public administrations allocate tax money in Spain to fund public services and benefits. Please tell me if you believe that they spend too much, just enough, or very few resources to each of the services I mention	1 = Too many 2 = Just enough 3 = Very little
Self-interest variables		
Habitat size	Size of the respondent's municipality of residence	1 = 2,000 inhabitants or less 2 = 2,001 to 10,000 inhabitants 3 = 10,001 to 50,000 inhabitants 4 = 50,001 to 100,000 inhabitants 5 = 100,001 to 400,000 inhabitants 6 = 400,001 to 1,000,000 inhabitants 7 = More than 1,000,000 inhabitants
Sex	Sex of respondent	1 = Male 2 = Woman
Age	How old were you on your last birthday?	Age of respondent in years (18 to 99 years)
Educational level	What were the highest formal educational level you have completed?	1 = No education 2 = Primary 3 = Secondary 4 = Vocational Training 5 = Higher Education 6 = Postgraduate Studies
Socioeconomic status	Socioeconomic status of the respondent	1 = High / medium-high class 2 = New middle classes 3 = Old middle classes 4 = Skilled workers 5 = Unskilled workers
Household income	What is the average income in your household per month, after tax?	Scale in euros divided into 11 tranches, ranging from '1 = no income' to '11 = more than 6,000 euros per year'
Ideological variables and values		
Religiosity	How do you define yourself in religious matters?	1 = Catholic 2 = Believer of another religion 3 = Unbeliever 4 = Atheist
Practice of religion	How often do you attend mass or other religious services?	1 = Almost never 2 = Several times a year 3 = Once a month 4 = Almost every Sunday / religious holidays 5 = Several times a week
Ideological self-placement	When talking about politics, the expressions left and right are often used. In these boxes that go from left to right, in which box would you place yourself?	Scale from 1 to 10, where 1 equals extreme left and 10 extreme right
Identification with a political party	In the last general election, could you tell me which party or coalition you voted for?	List of political parties that ran in the election. Pre-coded responses.

The level of education can have either positive or negative effects on the support for public expenditure in general (Erikson *et al.*, 1989). More educated citizens are more easily incorporated into the labour market, and therefore gain access to well-paid jobs and have a lower risk of being unemployed, so they do not perceive the need to support income and redistribution policies. However, education is likely to promote socialisation in egalitarian values, generating favourable attitudes toward spending on welfare programmes (Andreß and Heinen, 2001). Most studies have indicated that there is a negative relationship between education and support for public expenditure in Welfare States (Linos and West, 2003; Jæger, 2006), but others have established a positive correlation (Sears and Funk 1991).

Other sociodemographic variables, invariably related to preferences, are sex and age. In general, women and young people are more in favour of public spending, especially on social programmes (Sanders, 1988; Carrillo and Tamayo, 2011). More women than men demand increased resources because of their more vulnerable position in the labour market and the role they have traditionally assumed in caring for the family (Svallfors, 2003). It is also expected that youth will largely support social policies because young cohorts have enjoyed high levels of material well-being, more than previous generations, and have more egalitarian values (Inglehart, 1998). And it is logical to assume that young people are seen as potential beneficiaries of programmes for children and families, unemployment benefits and cultural services, while the elderly use social services, pensions and healthcare. Consequently, these demographic groups will be more in favour of spending than middle-aged adults (Blekesaune and Quadagno, 2003).

Likewise, habitat size, as an indicator of the social context, conditions attitudes, as the inhabitants of smaller municipalities perceive that they must pay for numerous

benefits which they have difficulty in accessing due to their place of residence (Carrillo and Tamayo, 2011).

The variables selected to measure the effect of values and ideology were: religiosity, weekly practice of religion, ideological self-placement, and identification with a political party. The following basic hypothesis is proposed: *people with a left-wing ideology, and / or who vote for leftist or centre-left parties, demand that public spending increase to a greater extent than people with a right-wing ideology, and / or vote for right-wing parties.* At the same time, religiosity will affect opinions about the role of the market and the state, about solidarity and attention to vulnerable groups.

The association between ideology and spending preferences is well documented. Individuals with leftist ideology or who vote for leftist parties are more likely to support different public policies, mainly in the welfare area (Jacoby, 1991; Shivo and Uusitalo, 1995; Rudolph and Evans, 2005; Arriba *et al.*, 2006). It seems reasonable to consider that these citizens who are more likely to increase public intervention and ideologically more aligned with the Welfare State will be more in favour of increasing social spending, to safeguard the life quality levels that the welfare system ensures (Lau and Heldman, 2009).

To evaluate the effect of self-interest and symbolic predispositions on spending preferences, bivariate correlations were calculated between the dependent variable and each of the independent variables, applying different coefficients depending on whether the explanatory variable was ordinal (Spearman's rho), nominal (contingency coefficient) or confidence interval (Pearson's r). Contingency tables were also prepared.

Depending on the behaviours foreseen by the theories forming the analytical framework, the following specific working hypotheses were formulated:

H₁: Citizens' preferences for public spending programmes depend on their individual interests, so they will support spending on those programmes that benefit them at present, or may be beneficial for them or their families in the future.

H₂: Public spending preferences essentially depend on the ideological orientation and values of the individual.

H₃: The impact of both self-interest and symbolic predispositions varies from one policy to another; individual interests have a greater influence in the formation of preferences regarding economic interests and income transfers, while the effect of values and ideology is greater in sovereignty and post-materialist policies.

H₄: During a prolonged economic crisis, the influence of self-interest increases in the formation of preferences about public expenditure.

RESULTS: DETERMINANTS OF EXPENDITURE PREFERENCES

Table 1 shows the results of the statistical analysis on the effect of self-interest and of values as predictors of public expenditure preferences in Spain.

The first relevant finding is that, as the theory predicts, the interests of individuals influence their public spending preferences, albeit though not irrelevant. Self-interest has a limited impact on attitudes towards spending in most policies, even for those programmes directly related to material issues that would affect the 'utilities' of citizens and / or their families.

The second finding was that the variable that exerts the greatest influence is the level of household income³, although data for this

indicator are only available from 2010 onwards. Family income has a negative correlation with spending preferences in almost all programmes, and this association is stronger in social security and unemployment protection policies, which fit the self-interest thesis. Other statistically significant variables are education level, which affects spending demands in most areas, as well as habitat size and age, which only act on the demand for certain programmes.

In terms of the effect of symbolic predispositions, first, ideology conditions preferences in almost all public policies, but its influence was neither very strong nor constant. During the period under consideration, ideological issues affected the demand for resources in ten of the twelve programmes, with some fluctuations. Second, identification with a political party is a better predictor of preferences than ideological self-placement. Third, as predicted, citizens who identify with the left and / or vote for leftist parties are more in favour of increasing spending, except in defence and citizen security. Finally, religiosity was a conditioning factor for most programmes.

However, the review of public policies is more relevant for identifying significant trends.

Sovereignty policies

The most influential factor on attitudes towards spending on *defence*, apart from income level, is education, as the least educated people are more likely to support an increase in this item. In *citizen security*, the demand for resources also correlates negatively with education level, and positively with age. Sex is an explanatory variable, as women were more concerned than men about interventions in public order.

It is striking that defence and citizen security are the only matters in which the association between ideological self-placement and demand for resources, besides being

³ The variables 'personal economic situation' (statistically correlated with the demand for spending on most public policies) and 'employment status' were also included in the analysis.

somewhat stronger, has a negative sign: the respondents with more positive opinions were those to the right of the political spectrum. In addition, support for military spending is greater among PP and CiU voters, decreasing among UI voters, while PSOE voters occupy an intermediate position. In spite of these correlations, ideological questions in terms of citizen security are increasingly less important, especially since the beginning of the crisis.

As for values, people who are believers and practise a religion are more supportive of spending on military programmes and public order. With the exception of the most religious people and those who locate themselves on the right, public opinion largely rejects an increase in defence spending. In short, defence spending preferences are more determined by symbolic predispositions than by self-interest. However, in terms of citizen security, socio-demographic factors are increasingly important, while the influence of ideology diminishes.

As regards *justice*, the main determinants are education level and socio-economic status. Specifically, upper and upper-middle class, urban and cultivated people, and middle-aged people demand a greater budgetary effort in the administration of justice. Expenditure preferences are mainly explained by the possibility of 'consuming' justice, but symbolic predispositions have little impact.

Economic intervention policies

This area includes policies related to *public works* and *transport and communications*. For the former, the two most important variables were habitat size and sex: the inhabitants of small municipalities and men are more in favour of increasing resources for infrastructures. For the latter, the main determinants of demands for expenditure are, again, habitat followed by income level. Until the 1990s, urban dwellers perceived there to

be scarce resources for both public works and transport, while rural communities are now more interested in more money being spent on these programmes, since the investment effort is focused on urban areas.

Religiosity is not a conditioning factor and the significance of ideological orientation has increased for transport and communications⁴ since the crisis became aggravated. In short, the effect of socio-demographic variables tends to be attenuated, and a clear pattern cannot be observed for the effect of values. In general, Spaniards perceive that an substantial investment has been made in these policies, which benefit almost all of them.

Welfare policies

Beginning with *housing* policy, statistical associations were found that agreed with self-interest theory, with age being the main predictor. Young people, the urban population and the families on the lowest incomes were the socio-demographic groups that demanded more public investment. A correlation was also found between this demand for expenditure and the fact of living in rented accommodation, or in a house temporarily made available at low prices by a company or the family.

Whereas religion had a certain influence, the practice of religion did not: atheists and agnostics supported increasing resources for public housing more. Ideology has been a significant variable since the mid-1990s. Left-wing individuals believe that spending is too low, and the differences between voters in different parties is notable. Thus, 30% more IU voters considered that there was insufficient investment in housing than PP voters.

As for *healthcare*, the degree of correlation with the explanatory variables was une-

⁴ Voters from all parties said that resources for public works were sufficient.

TABLE 1. Influence of self-interest, values and ideology on citizens' public spending preferences by policy area (1985-2015)

	Habitat size	Sex	Age	Education level	Socio-economics status	Household in home	Religiosity	Practice religion	Ideological self-placement	Identification with political party ^a
Sovereignty policies										
<i>Defense</i>										
1985	-0.100**	0.053*	0.079**	-0.035					0.248**	0.283**
1990	0.001	0.069**	0.040	-0.059**					s.d.	0.288**
1995	0.012	0.030	0.079**	-0.053*	-0.027				0.170**	0.249**
2000	-0.023	0.062**	0.076**	-0.081**	0.018				0.184**	0.257**
2005	0.075**	0.006	0.024	-0.085**	0.021		-0.091**	0.092**	0.170**	0.254**
2010	0.011	0.023	-0.023	-0.067**	0.048*	-0.104**	-0.079**	0.088**	0.146**	0.178**
2015	-0.039	0.010	-0.026	-0.050*	0.005	-0.258**	-0.128**	0.074**	0.208**	0.258**
<i>Citizen security</i>										
1985	-0.014	0.052*	0.069**	-0.015					0.261**	0.299**
1990	0.034	0.089**	0.052*	0.013					s.d.	0.317**
1995	0.013	0.033	0.056*	0.012	-0.061**				0.168**	0.309**
2000	0.111**	0.030	0.026	0.020	-0.014				0.057*	0.236**
2005	0.051*	0.033	0.093**	-0.073**	-0.048*		-0.039	0.024	0.024	0.247**
2010	-0.037	0.069**	0.092**	-0.043*	0.021	-0.086**	-0.060**	0.053**	0.056*	0.186**
2015	-0.001	0.030	0.037	-0.065**	0.036	-0.077**	-0.080**	0.013	0.110**	0.148**
<i>Justice</i>										
1990	0.075**	-0.001	-0.014	0.026					s.d.	0.298**
1995	-0.014	0.020	-0.031	0.052**	-0.089**				0.056*	0.241**
2000	0.052*	0.020	0.020	0.073**	-0.048*				-0.062**	0.193
2005	0.039	0.016	0.067**	0.088**	-0.086**		0.001	0.013	-0.032	0.189
2010	-0.018	0.036	0.036	0.092**	-0.032	0.039	0.024	-0.075*	0.033	0.151**
2015	0.014	0.016	0.025	0.055*	-0.007	-0.043	0.034	-0.036	-0.100**	0.149
Economic intervention policies										
<i>Public Works</i>										
1985	0.100**	-0.019	-0.057*	0.066**					-0.095**	0.204
1990	-0.002	-0.055*	-0.022	0.060**					s.d.	0.242**
1995	-0.093**	-0.023	-0.020	0.030	-0.048*				0.024	0.235**
2000	-0.025	-0.076**	0.068**	0.031	-0.056*				-0.036	0.208**
2005	-0.107**	-0.084**	0.054*	-0.011	0.027		-0.022	0.014	0.007	0.214**
2010	-0.067**	-0.068**	0.037	-0.075**	0.054**	-0.061**	-0.029	0.051*	0.021	0.140*
2015	-0.098**	0.004	0.088**	-0.071**	0.041	-0.085**	-0.049**	-0.001	-0.053**	0.166*

TABLE 1. Influence of self-interest, values and ideology on citizens' public spending preferences by policy area (1985-2015) (continued)

	Habitat size	Sex	Age	Education level	Socio-economics status	Household in home	Religiosity	Practice religion	Ideological self-placement	Identification with political party ^a
<i>Transportation and communication</i>										
1990	0.132**	0.020	-0.055*	0.114**					s.d.	0.306**
1995	-0.038	0.003	-0.020	0.044	-0.033				0.012	0.227*
2000	0.022	-0.011	0.024	0.040	-0.069**				-0.073**	0.191
2005	0.044*	0.005	-0.017	0.051*	-0.029		0.056*	-0.069**	-0.064*	0.207*
2010	-0.054	0.055*	0.085**	-0.084	-0.056*	-0.108**	0.053**	0.021	0.033	0.146*
2015	-0.095**	0.028	0.003	-0.036	0.038	-0.097**	0.011	-0.038	-0.084**	0.172**
Welfare policies										
<i>Housing</i>										
1985	0.151**	0.007	-0.047*	0.058*					-0.041	0.184
1990	0.163**	0.027	-0.028	0.055*					s.d.	0.247**
1995	0.115**	-0.014	-0.076**	0.114**	-0.079**				-0.036	0.221
2000	0.103**	0.022	-0.046*	0.066**	-0.008				-0.131**	0.152**
2005	0.105**	-0.001	-0.045*	0.102**	-0.081**		0.086**	-0.097**	-0.029	0.221**
2010	-0.007	0.061**	0.057*	-0.034	-0.009	-0.068**	0.082**	-0.080	-0.051*	0.145*
2015	0.022	0.034	-0.025	-0.025	0.030	-0.093**	0.083**	-0.053	-0.210**	0.206**
<i>Healthcare</i>										
1985	0.224**	-0.003	-0.083**	0.076**					-0.107**	0.261**
1990	0.085**	0.035	-0.058**	0.045*					s.d.	0.259**
1995	0.054*	-0.017	-0.071**	0.120**	-0.099**				0.046	0.241**
2000	0.022	0.017	0.005	0.032	-0.006				-0.056*	0.137*
2005	0.036	0.039	-0.018	0.042*	-0.031		0.041	-0.095**	-0.083**	0.207*
2010	0.024	0.072**	0.008	-0.012	-0.003	-0.047*	0.061**	-0.092**	-0.168**	0.190**
2015	0.026	0.060**	-0.024	-0.018	-0.032	-0.049*	-0.039	-0.092**	-0.176**	0.215**
<i>Education</i>										
1985	0.182**	0.031	-0.123**	0.153**					-0.006	0.177
1990	0.077**	0.016	-0.115**	0.153**					s.d.	0.273**
1995	0.107**	-0.003	-0.087**	0.157**	-0.085**				0.019	0.264**
2000	0.112**	0.024	-0.017	0.141**	-0.096**				-0.088**	0.206
2005	0.142**	0.012	-0.026	0.147**	-0.119**		0.083**	-0.084**	-0.052*	0.195
2010	0.058**	0.011	-0.163**	0.082**	-0.045**	-0.087**	0.055**	-0.044*	0.054*	0.139
2015	0.050*	0.082**	-0.030	0.024	0.047**	-0.091**	0.087**	-0.054*	0.016	0.193**

TABLE 1. Influence of self-interest, values and ideology on citizens' public spending preferences by policy area (1985-2015) (continued)

	Habitat size	Sex	Age	Education level	Socio-economics status	Income in home	Religiosity	Religion practice	Ideological self-placement	Identification with political party ^a
<i>Social Security / Pensions</i>										
1990	0.144**	0.034	0.042	-0.007					0.104**	0.243**
1995	0.084**	0.057**	0.023	0.005	-0.031				s.d.	0.270**
2000	0.032	0.053*	0.036	-0.022	0.040				0.022	0.209
2005	-0.006	0.068**	0.106**	-0.125**	0.054*				-0.115**	0.166**
2010	0.010	0.071**	0.018	-0.056*	0.076**	-0.149**	-0.053*	0.015	-0.093**	0.207*
2015	-0.012	0.091**	0.046*	-0.090**	0.079**	-0.102**	-0.034	0.091**	-0.080**	0.186**
<i>Protection against unemployment</i>										
1990	0.207**	0.005	-0.058**	0.021					s.d.	s.d.
1995	0.114**	-0.030	-0.124**	0.005	0.009				-0.039**	0.208
2000	0.084**	0.028	-0.080**	0.051**	0.025				-0.124**	0.265**
2005	0.031	0.047*	-0.091**	0.003	0.031		0.079**	-0.062**	-0.088**	0.146**
2010	0.006	0.060**	-0.060**	-0.114**	0.060**	-0.117**	0.015	-0.046**	-0.066**	0.160**
2015	0.052*	0.046*	-0.002	-0.058**	0.065**	-0.084**	0.062**	-0.170**	-0.170**	0.206**
<i>Culture</i>										
1995	-0.014	0.020	-0.031	0.052**	-0.089**				-0.146**	0.234**
2000	0.052*	0.020	0.020	0.073**	-0.048*				-0.142**	0.234**
2005	0.039	0.016	0.067**	0.088**	-0.086**		0.086**	-0.116**	-0.119**	0.211*
2010	-0.018	0.036	0.036	0.092**	-0.032	0.039	0.082**	-0.110**	-0.091**	0.175**
2015	0.014	0.016	0.025	0.055*	-0.007	-0.043	0.083**	-0.027	-0.198**	0.206**
<i>Environmental Protection</i>										
2000	0.114**	-0.029	-0.079**	0.151**	-0.087**				-0.164**	0.222*
2005	0.092**	0.011	-0.079**	0.155**	-0.150**		0.081**	-0.107**	-0.101**	0.232**
2010	0.032	0.043	0.105**	-0.048*	-0.114**	0.055**	0.146**	-0.126**	-0.091**	0.151*
2015	0.086**	0.021	-0.050*	0.116**	-0.077**	0.069**	0.153**	-0.018	-0.178**	0.179**

**Sig. $p < 0.010$, *Sig. $p < 0.050$. Bivariate correlations.

^a The variable 'identification with a political party' is nominal, so the contingency coefficient was used. It ranged between 0 and 1, measuring the strength of the relationship but not the direction. Information complemented with that from the contingency tables.

Source: Developed by the author based on Studies 1465 of 1985, 1880 of 1990, 2187 of 1995, 2394 of 2000, 2615 of 2005, 2841 of 2010 and 3105 of 2015 by the CIS, and Carrillo and Tamayo (2011: 209-215).

qual, and oscillated over time. During the 1980s and 1990s, urban dwellers, adults between the ages of 25 and 44, and the most educated people demanded that more resources be allocated to healthcare. These factors were not significant later, and support for healthcare spending was higher among

women and low-income families from 2000 onwards. The type of health services used—public, private or both—was included as a possible predictor, but, although there was a statistical relationship, attitudes hardly varied depending on the use of public or private healthcare.

Socio-demographic factors have traditionally been the most influential in preferences, but since 2010, religiosity and, increasingly, ideology, have become more important. Leftist respondents, mainly IU voters, called for more funding for healthcare, in a context of budget cuts.

Another essential policy of the Welfare State is *education*. Spending demands here depend on habitat size, education level, social class and household income. Citizens living in larger towns or cities⁵, who are better educated, with a medium-high-status, and those of low-income said that an increase in the education budget was necessary. Interestingly, none of the indicators of self-interest under consideration—having children of school age, having a grant, and having studied in state school compulsory education—was associated with these preferences.

Attitudes were increasingly conditioned by symbolic predispositions, in addition to the influence of self-interest. Religion was a salient variable, probably due to the role played by Catholic publicly-funded private schools, and the controversy in connection with religion as a subject in educational programmes. But ideological orientation was not decisive until the beginning of the crisis, and since 2011 there has been a clear increase in the demand for resources for education by voters from left-wing parties. The substantial adjustments in educational programmes that the PP government has made, and the debate between parties on the privatisation of education also need to be taken into account. In this regard, Eismeier (1982: 138) argued that ideological differences have a greater impact on preferences on education and healthcare, in programmes intellectually and politically based on the Welfare State.

The two income transfer policies, *social security* and *unemployment protection*, deserve to be mentioned separately, as these are programmes that directly affect the particular situation of the individual. Preferences about pension expenditure somewhat correlated with each self-interest indicator, although not steadily or consistently. The essential predictors are: household income, education level, socio-economic status and sex. Thus, individuals with fewer resources, less educated people and women (especially widows) are more in favour of increasing such benefits. In addition, until the mid-1990s, support for this programme was greater among skilled and unskilled workers, but as the crisis progressed, support among the old and new middle classes grew.

Unemployment expenditure preferences are related to these same variables, although the prime factor is age. As expected, the demand for resources comes mainly from the youngest, also from individuals with lower education, workers and people with lower income, that is, the groups most affected by unemployment. However, during the crisis all socio-demographic and economic groups demanded an increase in these benefits.

Identification with a political party also has some effect on preferences, especially with regard to unemployment benefits. Those who vote for IU and the PSOE are strongly in favour of increasing resources and, again, it was seen that during the crisis the positions of the voters of the different parties had become polarised.

Finally, the variables that influenced opinions on the expenditure for postmaterialist policies are listed. These refer to policies concerning *culture* and *environmental protection*. Demands for spending on *culture* depend on habitat size, education level, social class, and household income. Those who live in large towns and cities want an increase in the budget for culture—as they have greater access to it—as well as the

⁵ In many cities demand for state school places exceeded supply, and it is necessary to establish added services, such as canteen services.

more educated, upper-class people and those with high income.

Attitudes towards public investment in *environmental protection* are associated with all selected variables, except for sex. Age and status negatively affect the strength of demand, while there is a positive association with habitat, education, and family income.

The preferences regarding these two programmes depend on both interests and symbolic predispositions and, while self-interest is more important, the impact of values had tended to increase. Religiosity and the practice of religion affect the demand for resources—especially in the environment—as well as ideology and membership of a political party. In both policies, the formation of preferences is consistent with Inglehart's (1998) postmaterialist model.

DISCUSSION: ARE THE SPANISH SELFISH IN THEIR PUBLIC SPENDING PREFERENCES?

The main conclusion of the study is that both demographic and socio-economic factors such as beliefs and ideology play a significant role in the formation of preferences about public spending in Spain (*Table 2*). This implies that self-interest theory and the symbolic politics perspectives are, from an empirical point of view, valid for the Spanish case, although with differing emphases.

The results obtained are consistent with the first two hypotheses: individual interests based on economic motivations (H_1 and, simultaneously, values and ideological orientation (H_2)) determine the degree of support for each spending programme, and both explanations are not exclusive. This statement requires qualification.

First, the analyses carried out indicated that, although socio-demographic and socio-economic characteristics are relevant predictors of Spanish public spending de-

mands in all policies, (mainly in the area of welfare, but also in income transfer programmes and in justice), the degree of statistical association was moderate, and therefore their explanatory capacity is limited, as previous studies have already confirmed (Sears and Funk, 1990). This does not imply that the results are inconsequential. However, it was clear that the people who benefit most from public assistance and the socio-economically most vulnerable groups—lower class, low-education individuals, young people, etc.—generally supported an increase in public expenditure, a conclusion that has been commonly found in the literature on self-interest (see, especially, Sanders, 1988; Rudolph and Evans, 2005).

Second, in agreement with Henderson *et al.* (1995: 40), it was confirmed that the main predictor of preferences was the level of family income, a variable associated with the demand for public expenditure in the twelve policies studied. Lower-income citizens want to increase funding for virtually all policies because they feel they are compensated for the exchange between taxes paid and benefits received, while those with high incomes do not believe that they have the opportunity or the need to access such benefits.

Third, although previous studies have argued that attitudes toward spending are negatively conditioned by socio-economic status—an indicator associated with income and education—as middle—and upper-class people are less predisposed to maintain public resources in programmes that they do not need to use (Himmelstein and McRae, 1988; Svallfors, 2003), the degree of association was relatively low in Spain, except in education, pensions, culture and the environment. Interestingly, the middle class, and increasingly the upper class, supported certain policies because they consider them to be beneficial to society as a whole, a symbolic issue that is consistent with the socio-tropic approach (Kinder and Kiwet, 1981).

TABLE 2. Summary of the main individual determinants of citizen preferences about public spending

Defence policy	Public order policy	Justice policy	Public works policy
<ul style="list-style-type: none"> - Educational level - - Household income - - Religiosity - - Practice of religion + - Ideology +: right - Identification with parties on the right 	<ul style="list-style-type: none"> • Age + • Education level - • Household income - • Religiosity - • Practice of religion + • Ideology +: right • Identification with parties on the right 	<ul style="list-style-type: none"> - Education level + - Status - - Income - 	<ul style="list-style-type: none"> • Habitat Size - • Sex - • Household income - • Identification with parties on the left
Transport and communications policy	Housing Policy	Healthcare policy	Education Policy
<ul style="list-style-type: none"> - Habitat size - - Income - - Identification with parties on the left 	<ul style="list-style-type: none"> • Habitat size + • Age - • Education level + • Household income - • Religiosity + • Ideology -: left • Identification with parties on the left 	<ul style="list-style-type: none"> - Household income - - Practice of religion - - Ideology -: left - Identification with parties on the left 	<ul style="list-style-type: none"> • Habitat size + • Education level + • Status - • Household income - • Religiosity + • Practice of religion • Identification with parties on the left
Social security policy	Unemployment policy	Cultural policy	Environmental Policy
<ul style="list-style-type: none"> - Sex + - Education level - - Status + - Household income - - Identification with parties on the left 	<ul style="list-style-type: none"> • Age - • Education level - • Household income - • Practice of religion - • Ideology -: left • Identification with parties on the left 	<ul style="list-style-type: none"> - Habitat size + - Education level + - Status - - Household income+ - Religiosity + - Practice of religion - - Ideology -: left - Identification with parties on the left 	<ul style="list-style-type: none"> • Habitat size + • Age - • Education level + • Status - • Religiosity + • Practice of religion - • Ideology -: left • Identification with parties on the left

Note: Signs + and - indicate the orientation of the causal relationships between the variables described in previous sections.

Source: Developed by the author based on an analysis of Table's 1 statistical data.

Fourth, according to the studies reviewed, the individual's education level should negatively correlate with the degree of support for public expenditure (Linos and West, 2003; Jæger, 2006). This thesis applies to sovereignty, social security and unemployment policies, but there was a positive correlation in the case of postmaterialist policies, education and justice. The effects of educational level seem to reflect the socio-economic status rather than the differentiated support for certain programmes.

Fifth, based on the premises of Hasenfeld and Rafferty (1989: 1042) and Sanders (1988:

320-321), it was expected that women and young people, as they belong to vulnerable groups from a socio-economic and employment viewpoint, would be in favour of many spending programmes. Yet, women only showed more support than men for spending on social security. Young people demanded more resources for housing, education and unemployment benefits, data consistent with self-interest theory; but also for the environment, in line with post-materialism theses (Inglehart, 1998).

In the sphere of symbolic predispositions, sufficient empirical evidence has been

found that ideology explains the preference for greater or lesser public expenditure in many areas (H_2), although its impact was weaker than predicted by some publications that considered this variable to be the essential modulator of attitudes towards spending. The data indicated that the essential factor was identification with a political party, and that citizens who voted for leftist parties supported an increase of resources for most programmes. These findings coincided with the results of numerous studies on the determinants of attitudes towards the Welfare State (eg Jacoby, 1991; Blekesaune and Quadagno, 2003; Arriba *et al.*, 2006), who all concluded that voting for a specific party was associated with entrenched ideological beliefs—support for public intervention, advocacy of the Welfare State, and equality (Shivo and Uusitalo, 1995; Funk, 2000)—which affected spending preferences.

At the same time, as was initially predicted (H_3), the impact of self-interest and symbolic predispositions varied significantly from one policy to another. Individuals used different criteria in articulating their spending demands in each area, as this statistical study shows. It is logical to assume that this articulation influenced whether they were universalist or sectoral programmes, contributory benefits or assistance directed at low-income groups, generalist or equality policies, etc.

For example, in income transfer policies and housing, the demand for spending came mainly from those who believed that they could benefit from this kind of assistance. In other policies, the conditioning factor was values. Thus, the demand for spending on defence came largely from right-wing voters who advocated strengthening the area of sovereignty due a question of political culture. On the contrary, the demand for environmental and cultural spending came mainly from leftist and young voters, since these are programmes traditionally associated with leftist parties and postmaterialist values (Inglehart, 1998).

Finally, the analysis confirms the increase of the importance of ‘interests’ versus ‘symbolic issues’ during periods of serious and prolonged crisis (H_4), since in this context many people saw their economic capacity reduced and as they approached risk situations, they became users of public services that they did not need before. This seemed to occur in the case of policies that affected peoples’ material security. In parallel, the opposite trend appeared: the impact of ideology on the demand for spending increases in certain policies, especially in health, social security, unemployment protection, and education, all of them hard-core policies of the welfare system that had experienced budget cuts. Presumably, right-wing voters will support the adjustment measures of the ruling party, subscribing to the neoliberal discourse on the need to reduce public intervention. According to Calzada and del Pino (2013), these voters, many with high incomes and of middle and upper class, seem to be increasingly reluctant to fund spending for disadvantaged groups. And leftist voters, traditionally advocates of social policies, will increase their spending support against government measures, based on understanding that they must protect the Welfare State regardless of their individual interests. Hence there is a polarisation of attitudes due to ideology, which would support the thesis put forward by Brooks and Manza (2013) that crises produce a large shift in public opinion towards the left, increasing the demand for social spending.

The original question remains to be answered: in the formation of spending preferences, are Spaniards motivated by self-interest or are they conditioned by values? The answer was not conclusive because attitudes are multidimensional and it is very difficult to empirically separate the role played by self-interest and ideology in the configuration of preferences. Individuals are often motivated by self-interest because it is an atavistic

part of human behaviour, but values and ideology have an inherent effect. To further develop this theme, a regression model will be carried out in the future in order to analyse the combined impact of the selected variables on attitudes, controlling for the effect of multicollinearity.

BIBLIOGRAPHY

- Andreß, Hans-Jürgen and Heinen, Thorsten (2001). "Four World of Welfare State Attitudes? A Comparison of Germany, Norway and United States". *European Sociological Review*, 17(4): 337-356.
- Arriba, Ana et al. (2006). *Los ciudadanos y el Estado de Bienestar en España (1985-2005)*. Madrid: CIS.
- Bergstrom, Theodore and Goodman, Robert (1973). "Private Demands for Public Goods". *American Economic Review*, 63(3): 280-296.
- Birdsall, William (1965). "A Study of Demand for Public Goods". In: Musgrave, R. A. (comp.). *Essays in Fiscal Federalism*. Washington: The Brookings Institution.
- Blekesaune, Morten and Quadagno, Jill (2003). "Public Attitudes toward Welfare State Policies: A Comparative Analysis of 24 Nations". *Sociological Review*, 19(5): 415-427.
- Brooks, Clem and Manza, Jeff (2013). "A Broken Public? Americans' Responses to the Great Recession". *American Sociological Review*, 78(5): 727-748.
- Calzada, Inés and Pino, Eloísa del (2013). "Algo cambia, algo permanece: los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos durante la crisis (2008-2012)". *Presupuesto y Gasto Público*, 71: 165-186.
- Carrillo, Ernesto and Tamayo, Manuel (2011). "La formación de las preferencias de gasto público: Un análisis comparado por políticas públicas". *Frontera norte*, 23(45): 193-229.
- Citrin, Jack (1979). "Do People Really Want Something for Nothing: Public Opinion on Taxes and Government Spending". *National Tax Journal*, 32(2): 113-129.
- Citrin, Jack and Green, Donald (1990). "The Self-Interest Motive in American Public Opinion". *Research in Micropolitics*, 3(1): 1-28.
- Deacon, Robert and Shapiro, Perry (1975). "Private Preference for Collective Goods Revealed through Voting on Referenda". *American Economic Review*, 65:943-955.
- Diamond, Patrick and Lodge, Guy (2013). "European Welfare States after the Crisis". *Policy Network/ IPPR Paper*. Available at: <http://www.policynetwork.net/publications/4320/European-Welfare-States-after-the-Crisis>, access June, 2013.
- Eismeyer, Theodore (1982). "Public Preferences about Government Spending: Partisan, Social, and Attitudinal Sources of Policy Differences". *Political Behaviour*, 4(2): 133-145.
- Erikson, Robert et al. (1989). "Political Parties, Public Opinion, and State Policy". *American Political Science Review*, 83(03): 729-750.
- Feldman, Stanley (1982). "Economic Self-Interest and Political Behavior". *American Journal of Political Science*, 3(26): 446-466.
- Ferris, James (1983). "Demands for Public Spending: An Attitudinal Approach". *Public Choice*, 40(2): 135-152.
- Forma, Pauli (1999). *Interests, Institutions and the Welfare State: Studies on Public Opinion towards the Welfare State*. Turku: STAKES, University of Turku.
- Funk, Carolyn (2000). "The Dual Influence of Self-Interest and Societal Interest in Public Opinion". *Political Research Quarterly*, 53(1): 37-62.
- Hasenfeld, Yeheskel and Rafferty, Jane (1989). "The Determinants of Public Attitudes toward the Welfare State". *Social Forces*, 67(4): 1027-1048.
- Henderson, Tammy L. et al. (1995). "Explaining public opinion toward government spending on child care". *Family relations*, 44(1): 37-45.
- Himmelstein, Jerome and McRae, James (1988). "Social Issues and Socioeconomic Status". *Public Opinion Quarterly*, 52(4): 492-512.
- Inglehart, Ronald (1998). *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: CIS.
- Jacoby, William (1991). "Ideological Identification and Issue Attitudes". *American Journal of Political Science*, 35(1): 178-205.
- Jacoby, William (1994). "Public Attitudes toward Government Spending". *American Journal of Political Science*, 38(2): 336-361.
- Jæger, Mads (2006). "Whats Makes People Support Public Responsibility for Welfare Provision: Self-

- interest or Political Ideology?”. *Acta Sociológica*, 49(3): 321-338.
- Kinder, Donald and Kiewiet, Roderick (1981). “Sociotropic Politics: The American Case”. *British Journal of Political Science*, 11(2): 129-161.
- Kristensen, Ole (1982). “Voter Attitudes and Public Spending: Is There a Relationship?”. *European Journal of Political Research*, 10(1): 35-52.
- Lau, Richard and Heldman, Caroline (2009). “Self-interest, Symbolic Attitudes, and Support for Public Policy: A Multilevel Analysis”. *Political Psychology*, 30(4): 513-537.
- Lewin, Leif (1991). *Self Interest and Public Interest in Western Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Lewis, Alan (1983). “Public Expenditures: Perceptions and Preferences”. *Journal of Economic Psychology*, 3(2): 159-167.
- Linos, Katerina and West, Martin (2003). “Self-interest, Social Beliefs and Attitudes to the Redistribution: Re-addressing the Issue of Cross-national Variations”. *European Sociological Review*, 19(4): 393-409.
- Margalit, Yotam (2013). “Explaining Social Policy Preferences: Evidence from the Great Recession”. *American Political Science Review*, 107(1): 80-103.
- Monroe, Alan (1979). “Consistency between Public Preferences and National Policy Decisions”. *American Politics Quarterly*, 7: 3-19.
- Mouritzen, Poul (1987). “The Demanding Citizen: Driven by Policy, Self-Interest or Ideology?”. *European Journal of Political Research*, 15(4): 417-435.
- Pino, Eloísa del (2005). *¿Se han modificado las preferencias de los ciudadanos sobre las políticas del Bienestar en España?*, Documento de Trabajo, 05-05. Madrid: Unidad de Políticas Comparadas (CSIC).
- Pino, Eloísa del et al. (2011). *La administración a juicio de los ciudadanos: actitudes hacia el gasto público*. Madrid: AEVAL.
- Rudolph, Thomas and Evans, Jillian (2005). “Political Trust, Ideology, and Public Support for Government Spending”. *American Journal of Political Science*, 49(3): 660-671.
- Sanders, Arthur (1988). “Rationality, Self-Interest, and Public Attitudes on Public Spending”. *Social Science Quarterly*, 69(2): 311-324.
- Sears, David et al. (1980). “Self-Interest vs. Symbolic Politics in Policy Attitudes and Presidential Voting”. *American Political Science Review*, 74(3): 670-684.
- Sears, David and Funk, Carolyn (1990). “The Limited Effect of Economic Self-Interest on the Political Attitudes of the Mass Public”. *Journal of Behavioral Economics*, 19(3): 2-91.
- Sears, David and Funk, Carolyn (1991). “The Role of Self-Interest in Social and Political Attitudes”. *Advances in Experimental Social Psychology*, 24(1): 1-91.
- Shockkaert, Erick (1987). “Preferences and Demand for Local Public Spending”. *Journal of Public Economics*, 34(2): 175-188.
- Shivo, Tuire and Uusitalo, Hannu (1995). “Attitudes towards the Welfare State. Evidence from Finland”. *Scandinavian Journal of Social Welfare*, 4(4): 215-223.
- Svallfors, Stefan (2003). “Welfare Regimes and Welfare Opinions: A Comparison of Eight Western Countries”. *Social Indicators Research*, 64(3): 495-520.
- Taylor-Gooby, Peter (1983). “Moralism, Self-interest and Attitudes to Welfare”. *Policy and Politics*, 11(2): 145-160.

RECEPTION: September 14, 2016

REVIEW: January 26, 2017

ACCEPTANCE: April 18, 2017

